

# CORRUPCIÓN ELECTORAL EN LA REPÚBLICA ROMANA: INTERESES DEL *POPULUS* Y LA *NOBILITAS* EN LA LUCHA POLÍTICA

**SANTIAGO CASTÁN**

*Profesor Titular de Derecho Romano*

*Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)*

Recepción: 15 de junio de 2012

Aprobado por el Consejo de Redacción: 15 de julio de 2012

**RESUMEN:** La corrupción electoral (*ambitus*) constituye un fenómeno que fue manifestándose desde la época central de la República romana y alcanzó su máxima cota en el siglo I a. C. La ambición de la nobleza por el poder y las necesidades económicas de una gran parte de la ciudadanía convirtieron el soborno electoral en una práctica muy extendida que provocó la degradación de las instituciones políticas.

**PALABRAS CLAVE:** *Ambitus*, Soborno, *Nobilitas*, *Populus*, Elecciones, Violencia, *Leges De Ambitu*, Oligarquía

**ABSTRACT:** Electoral corruption (*ambitus*) was a phenomenon that arose during the middle Roman Republic and peaked in the 1st Century BC. The nobility's thirst for power and the financial needs of a large proportion of the populace rendered electoral bribery a very widespread practice which led to the decline of the political institutions.

**KEYWORDS:** *Ambitus*, Bribery, *Nobilitas*, *Populus*, Elections, Violence, *Leges De Ambitu*, Oligarchy

SUMARIO: I. ARISTOCRACIA. NOBILITAS. OLIGARQUÍA. II. AMBITUS. REGULACIÓN JURÍDICA. III. AMBITUS. PRÁCTICAS PROHIBIDAS.

*"Que todo lo existente está sujeto a extinción y a cambio casi no es necesario decirlo. La ley de la naturaleza brinda testimonio suficiente de ello... Efectivamente, cuando una constitución ha llegado, tras sortear numerosos peligros, a una inapelable posición de fuerza y supremacía, es evidente que el bienestar se afincará arraigadamente en su suelo; y que, como consecuencia, la vida se hará en ella mucho más dispendiosa, al par que sus hombres reñirán por las magistraturas o por cualquier otro empeño con una vehemencia indebida... El frontispicio del cambio llevará el nombre del pueblo, pues, llegados a este punto, unos sembrarán en él sentimientos de agravio, que utilizarán para satisfacer su codicia, otros lo halagarán colmándolo de jactancia, a fin de que sirva a sus ansias de poder... A partir de ese momento la constitución será bellísima de nombre –asumirá los de democracia y libertad-, pero caerá por sus acciones –las de oclocracia- en lo peor".*

Polybius, *Historiae*, VI, 57

Sirvan estas intuitivas palabras del historiador griego Polibio, escritas cien años antes del final de la República, para iniciar este trabajo que pretende señalar la corrupción de la clase política (*nobilitas*) y del propio pueblo romano en el ámbito puramente electoral como una de las causas determinantes de la crisis que puso fin al admirable sistema político republicano después de cinco apasionantes siglos de andadura histórica. Sin duda no fue el único factor que determinó su suerte<sup>1</sup>, pero la ambición por el poder de las familias de la aristocracia, el empuje del *ordo equester* como estamento socioeconómico con intenciones de gobierno, la formación de dos facciones dentro de la aristocracia senatorial con una diferente estrategia de índole político y social (*populares* y *optimates*) y un pueblo, el romano, que se dejó corromper por todos los anteriores, unas veces por necesidad, otras simplemente por avaricia, contribuyeron a que en los últimos cien años del régimen popular republicano las alteraciones del orden establecido fueran tan frecuentes que, inevitablemente, desvirtuaron

1 La caída del sistema constitucional más duradero en la larga historia romana no se debió a un único agente sino a una concatenación de múltiples causas. No hay más que recordar la trascendencia de otros acontecimientos como la desaparición –por ruina- del campesinado italiano ante la proliferación de extensos *latifundia* en manos de un reducido grupo de nobles; la formación de ejércitos profesionales al servicio de líderes que aspiraban al poder; la difícil relación entre ciudadanos y no ciudadanos y, por consiguiente, entre Roma e Italia y Roma y las provincias; la decadencia moral de las clases populares y de las clases altas, fruto de la terrible situación económica que padecían las primeras y por el influjo oriental en las costumbres y el gusto desmedido por el lujo y la riqueza que mostraron las segundas; el incremento extraordinario de esclavos que configuró una sociedad y economía esclavista; la violencia callejera; o, simplemente, la constatación de que el sistema de magistraturas y su limitación temporal no era un sistema ya válido para un Estado tan complejo. En suma, la transformación de una Roma ciudad-Estado en un Imperio universal fue un cambio tan sustancial en el entramado político-social de la *urbs* romana y en su gente, especialmente en la clase dirigente, que la constitución republicana no fue capaz de digerirlo (DE MARTINO (1973), v.2, 437 ss. y 455. BURDESE (1972), 142 ss. FÖGEN (2005), 192- 194. CERAMI/CORBINO/METRO/PURPURA (2006), 79). No sucedió de la noche a la mañana: el período conocido como *crisis de la República* se inició en el último tercio del siglo II a. C. y se prolongó hasta la formación del segundo triunvirato y la posterior ascensión de Cayo Julio César Octaviano como *princeps* del Estado romano un siglo después.

y debilitaron el sistema entero y causaron su desaparición. La corrupción política, que se direccionaba en sus dos sentidos posibles: de los magistrados hacia el pueblo, y de éste hacia sus gobernantes, provocó una degradación de las instituciones que fue extendiéndose por todos los ámbitos de la vida cotidiana. El fraude electoral y en ocasiones la violencia a él asociada pasaron a ser prácticas habituales en el camino hacia la gloria política. En parte se equivocaba el gran Montesquieu cuando afirmaba que Pompeyo y César habían acostumbrado al *populus* a ser gobernados por medio de prácticas corruptas<sup>2</sup>; en realidad, ese fenómeno, el de la corrupción política y el fraude electoral, había dado inicio mucho tiempo antes en Roma. Comenzamos.

## 1. ARISTOCRACIA. NOBILITAS. OLIGARQUÍA

1. La sociedad romana republicana experimentó una gran transformación en el último tercio del siglo IV a. C. En los albores de la República, la población menos favorecida que no pertenecía al patriciado, la plebe, comenzó a presentar los rasgos de un estamento de cierta homogeneidad<sup>3</sup> que planteaba unas reivindicaciones concretas en el aspecto económico y dejaba entrever otras mucho más ambiciosas en el plano político, como era el de la igualdad. Enfrente tenía la oposición de una aristocracia patricia que había ganado enorme protagonismo como consecuencia del establecimiento del nuevo régimen político<sup>4</sup>. Tradicionalmente se ha venido retrayendo el principio de la lucha de clases romanas al inicio de la República por ser éste el momento en que los patricios acapararon las magistraturas existentes a través del monopolio de los *auspicia*<sup>5</sup>, pero hay que precisar, en consonancia con una línea mayoritaria<sup>6</sup>, que el verdadero conflicto político no llegó hasta mediados del siglo IV cuando se plantearon las exigencias que motivarían las Leyes Licinio-Sextias. Hasta aquel momento, los movimientos organizados con una mayor dimensión por parte de la *plebs* se produjeron a propósito de demandas cuya fuente fundamental era de índole militar (negativa a la colaboración militar)<sup>7</sup> y de contenido económico<sup>8</sup>, con la pretensión principal de limitar la opresión financiera de los terratenientes romanos que pertenecían casi en su integridad al estamento patricio. No hay que desdeñar la importancia de otras protestas y requerimientos y sus correspondientes éxitos<sup>9</sup> en esta época, v. gr., *Lex Duodecim Tabularum*, 450 a.C., y *Lex Canuleia* del 445 (esta última ponía fin a una importante brecha social entre ambos órdenes)<sup>10</sup>, pero no es absurdo discernir que el grueso

---

2 MONTESQUIEU (1835), 149 ss.

3 GUARINO (1975), 170.

4 CAPOGROSSI COLOGNESI (2009), 82 ss.

5 MAGDELAIN (1964), 450 ss.

6 CORNELL (1999), 287 ss. con lit. DUPLÁ (2003), 61 ss.

7 FUENTESECA (2009), 108 y 110.

8 MONTERO/MARTÍNEZ PINNA (1990), 14 y 15.

9 GUARINO (1975), 21. CAPOGROSSI COLOGNESI (2009), 93 ss.

10 GUARINO (1975), 217 ss. CAPOGROSSI COLOGNESI (2009), 84.

de la masa plebeya –no así sus dirigentes, como iremos viendo– no tuviera en realidad como principal anhelo el reconocimiento de la igualdad política (el acceso a las magistraturas)<sup>11</sup> porque primaban otras preocupaciones y necesidades de primer orden, y estas eran las relativas a la tierra, las deudas y el interés de los préstamos<sup>12</sup>. Desde siempre se ha presentado a los plebeyos como un estrato unido en aras de la consecución de objetivos políticos comunes y en abierta lucha con el patriciado, pero algunos pasajes de Livio son reveladores en el sentido de demostrar que en aquellos años, las décadas posteriores a las XII Tablas, la afinidad entre los líderes plebeyos (los tribunos) y su gente, no era ni mucho menos absoluta<sup>13</sup>. Y eso podía deberse a que tenían prioridades distintas.

2. Las *Leges Liciniae-Sextiae* del 367 a.C. fueron iniciativa de los tribunos de la plebe Cayo Licinio Estolón y Lucio Sextio Laterano y constituyeron el punto de inflexión de la República romana dando lugar al nacimiento de lo que se ha llamado el Estado Patricio-Plebeyo. Se trata de una legislación trascendental ya que abordaba con audacia una triada de cuestiones que constituían la más seria interpelación de los plebeyos en el orden político y económico. No se puede negar que la aristocracia patricia, a la sazón el grupo que disfrutaba de mayores privilegios en tales aspectos, se resistió todo lo que pudo a la aprobación de esas normas: de hecho, el proyecto legislativo había echado a andar diez años atrás con el patrocinio de la misma pareja de tribunos<sup>14</sup>; y no era tampoco una pretensión nueva, pues casi un siglo antes el tribuno Cayo Canuleyo –conjuntamente con su *rogatio* relativa al matrimonio entre patricios y plebeyos– ya había requerido a los *patres* para que uno de los cónsules fuese elegido de entre la plebe, propuesta que fue totalmente rechazada por la cámara romana<sup>15</sup>. Pero tornando a la gestación de las *Leges*, frente a las presiones plebeyas y contando con la amenaza de una nueva secesión<sup>16</sup>, el Senado nombró dictador a Camilo quien finalmente no tuvo más remedio que ceder a la reivindicación popular y auspiciar su legalidad. ¿Fue un triunfo, entonces, de la plebe?<sup>17</sup> Sólo en parte, porque no se puede asegurar que los patricios renunciaran a ninguna prerrogativa propia, sino que decidieron compartir alguna de ellas y a cambio obtuvieron otras.

Desde el punto de vista institucional, las leyes tienen el mérito de hacer partícipes a todos, patricios y plebeyos, de las ventajas y virtudes de la *res publica*, de sentirse todos *cives romanorum*<sup>18</sup> y de rebajar la presión económica sobre los sufridos plebeyos, pues

11 Así lo reconoce KOVALIOV (1979), 84.

12 FERENCZY (1976), 47 ss. CORNELL (1999), 311 ss. ROLDÁN HERVÁS (1984), 71 y 72. VINCENTI en SCHIAVONE (2005), 26 y 27.

13 Liv.4.25; 4.35; 4.44. Los líderes plebeyos mostraron su indignación porque en las elecciones de cuestores y tribunos militares los plebeyos votaban antes a los patricios que a sus propios candidatos. GUARINO (1975), 152.

14 Liv. 6.35. CORNELL (1999), 384 ss. VINCENTI en SCHIAVONE (2005), 32 y 33.

15 Liv.4.1; 4.6. La explicación de la negativa residía en el hecho de que los plebeyos no podían tomar los auspicios (Liv. 6.41). Sin embargo sí se aprobó la *Lex canuleia* (445 a.C.) porque el Senado pensó que conseguido el levantamiento del veto matrimonial entre los órdenes, los líderes plebeyos se olvidarían de sus aspiraciones al consulado.

16 Liv. 6. 38.6; 6.41; 6.42.

17 Al respecto SYME (1939), 84 y 85. ARANGIO-RUIZ (1974), 62 y 63.

18 GUARINO (1975), 240 ss. DE MARTINO (2003a), 72.



las tres disposiciones que constituyen el núcleo de esta legislación abordaban tanto las necesidades económicas como los anhelos políticos, aunque para la posteridad haya quedado principalmente el recuerdo del logro del consulado por parte de los plebeyos<sup>19</sup>. Durante mucho tiempo, los más humildes sólo se habían sentido parte de la comunidad política por constituir una de las fuentes de reclutamiento del ejército romano<sup>20</sup>. El año 367 a.C. supuso el reconocimiento a su papel político y a su integración cívica, la más importante evolución de la constitución política republicana pero no la última, ya que los líderes plebeyos mantuvieron la presión en las siguientes décadas hasta conseguir los primeros nombramientos de personas plebeyas para la dictadura, la censura y la misma pretura, que tan sólo treinta años antes había sido reservada en exclusiva para los patricios<sup>21</sup>. La definitiva igualdad en los derechos políticos puede considerarse alcanzada especialmente tras la *Lex Ogulnia de sacerdotiis* (300 a. C.), pues abrió a los plebeyos los importantísimos colegios sacerdotales de los *pontifices* y los *augures*, última parcela exclusiva del patriciado –con la excepción del *interregno* que jamás cederían– cuyas funciones eran básicas en la actividad política, pues permitían interpretar la voluntad de los dioses (los *auspicia*, en manos del colegio de *augures*) y de esta forma prohibir comicios, anular y confirmar el resultado de las votaciones<sup>22</sup>. Los cimientos para alcanzar una paz social y política creíble y duradera se habían colocado, pero en honor a la verdad ésta no se alcanzaría jamás pues las desigualdades sociales siguieron existiendo y se acentuarían todavía más en los dos siglos venideros, ya que del expansionismo romano se obtuvieron enormes riquezas cuyos principales destinatarios siguieron siendo de forma directa la aristocracia patricia y las nuevas familias plebeyas que habían accedido a la clase política dirigente.

3. Si echamos la vista atrás y examinamos los primeros movimientos organizados de la plebe desde la primera secesión a principios del V a. C.<sup>23</sup> en contra del poder los patricios, salta a la vista que los plebeyos eran ya dirigidos por unos líderes que en cierto modo formaban una élite (política<sup>24</sup>, pero también económica) dentro de la *plebs*. Incluso

19 En virtud de la *Lex de consule plebeio* se lograba la igualdad política en los dos órdenes al quedar restaurada de forma permanente la magistratura del consulado (con la consiguiente desaparición de los tribunos militares con potestad consular) y decretar que uno de los dos cónsules podía ser plebeyo; a cambio, el patriciado obtenía la creación de dos nuevas magistraturas: la edilidad curul y la pretura. La *Lex de modo agrorum*, segundo de los hitos de las leyes Licinias-Sextias, limitaba los extensos latifundios de los terratenientes patricios y procuraba un reparto del *ager publicus* más equilibrado en beneficio de los plebeyos. Y, finalmente, una *Lex de aere alieno*, aliviaba la precaria situación económica de los plebeyos motivada por las deudas contraídas y los intereses que debían de soportar. La disposición concedía una moratoria de tres años para saldar las deudas y permitía compensar los intereses pagados en el capital restante. Liv. 6.35.4; 6.35.5; 6.42.9; 6.42.10. BURDESE (1972), 57 ss. DE FRANCISCI (1939), 306 ss. ARANGIO-RUIZ (1974), 60 ss. ADCOCK (1957), 9 ss. CAPOGROSSI COLOGNESI (2009), 95 ss. FUENTESECA (2009), 112 ss.

20 MONTERO/MARTÍNEZ PINNA (1990), 21.

21 HÖLKESKAMP (1993), 12 ss. FÖGEN (2005), 136 ss. y 187. Así, el primer dictador plebeyo fue nombrado en 356, y los primeros plebeyos elegidos como censor y pretor en los años 351 y 336 respectivamente.

22 Liv. 10.6-9. Cic., *de leg.*, 2.12.31: *Phil.*, 2.32.80 y 81; 2.33.83 y 84. BAUMAN (1983), 45 ss. FERENCZY (1976), 191 ss. NICOLET (1988), 251 ss.

23 Liv. 2.32.1 ss.

24 Se trataba de un grupo reducido cuyo papel en el marco de la constitución romana era limitado, pero consiguieron extender su influencia por las principales instituciones políticas: a través de una simbólica presencia en el Senado

en la Roma monárquica existieron plebeyos –o ciudadanos no patricios– que gozaron de una posición económica acomodada<sup>25</sup>, y con el transcurso del tiempo fueron formando una pequeña *nobleza* que no debía su *status* al nacimiento sino a un creciente poder económico. Es natural que fueran los integrantes de esa reducida nobleza quienes demandaran la igualdad política, como también lo es que en esa contienda se alinearan con los más débiles e hicieran suyas las pretensiones de éstos que giraban inequívocamente en torno al reparto del *ager publicus*, el peligro del *nexum* y los intereses y el pago de sus deudas. Entiendo como razonable que la gran masa ciudadana que tenía en los problemas económicos el foco de todas sus cuitas y preocupaciones, en verdad no albergasen aspiraciones políticas personales<sup>26</sup>. Muchos siglos de desigualdades sociales y regímenes que anteponían la riqueza y el linaje a otros méritos de tipo personal no podían ser preteridos de la noche a la mañana. Escapar de la pobreza podía ser un sueño realizable, pero cosa muy distinta era pensar que la igualdad política iba a conferir a todos las mismas oportunidades. Pero ese no era el caso de los plebeyos nobles, porque en cuanto el ordenamiento constitucional les concedió la igualdad política permitiéndoles aspirar a la magistratura suprema consiguieron, al mismo tiempo, la llave que les otorgaba el acceso a la élite romana, la aristocracia senatorial<sup>27</sup>.

La culminación del sueño político de esa minoría plebeya paradójicamente los alejó del estamento al que habían pertenecido durante generaciones y los emparentó con la clase patricia<sup>28</sup>. Lo prueba el devenir de la historia republicana: la nobleza política plebeya, más que ejercer un control sobre la nobleza patricia en beneficio de la masa popular, logró fusionarse con aquélla y asegurar sus intereses propios<sup>29</sup> aun cuando estos implicaban dejar en un segundo plano los de los más humildes. En este sentido el éxito de las *Liciniae*–

---

(*conscripti*), el desempeño de la jefatura política de su propio colectivo (tribunado de la plebe) y el derecho a dirigir el ejército romano mediante una magistratura extraordinaria de corte igualmente político (*tribuni militum consulari potestate*). Sobre estos últimos, creados en 445 a. C. por presión de los tribunos de la plebe, y elegidos tanto entre el orden patricio como en el plebeyo, véase Liv. 4.1–6. Dion. Hal. 11.53–61. D.1.2.2.25 (*Pomp. enchir. sing.*), STAVELEY (1953), 30 ss. y GUARINO (1975), 222 ss. La cuestión de los senadores plebeyos antes de la República no está exenta de debate. Las fuentes antiguas reconocen ampliaciones del Senado en época monárquica con ciudadanos no patricios: bien plebeyos, bien plebeyos elevados al rango de patricios. Dion. Hal. 2.47.1; 3.67.1. Val. Max. 2.47.1. Liv. 1.30. Cic. *de rep.*, 2.30.35; *Sest.*, 137. Plut., *Rom.*, 20.1. Suet., *Aug.*, 2.2. Vid. BISCARDI (1987), 10 ss. SCHERILLO/DELL'ORO (1977), 91 y 92. MANCUSO (1972), 337 ss. RICHARD (1978), 319 ss.

25 DUPLÁ (2003), 62 y 129: una élite económica no patricia que se acercará al movimiento plebeyo ante el rechazo del exclusivismo patricio. Sin embargo, el número de estos plebeyos ricos sería muy reducido: CORNELL (1999), 301 y 302. TORRENT (1995), 105. ARANGIO-RUIZ (1974), 55. FINLEY (1985), 22.

26 En el mismo sentido GOLDSWORTHY (2008), 47. FERENCZY (1976), 47 ss.

27 Livio expresa ese cambio: el consulado podía conseguirse en virtud de méritos personales, logrados principalmente en el terreno político y militar, y no simplemente por el nacimiento (Liv. 7.32.14).

28 TORRENT (2012), 29. ROLDÁN HERVÁS (1984), 71 y 72. MACKAY (2011), 28.

29 Muy significativa es la aprobación de la *Lex Poetelia de ambitu* (a. 358) a propuesta de un tribuno de la plebe, porque la medida no intentaba reprimir una forma concreta de corrupción, sino frenar la ambición política de los nuevos aspirantes al poder (*homines novi*). Es seguro que la ley no se dirigía contra los patricios, cuyas conexiones en la política les permitían abrirse paso en ella con facilidad, sino precisamente contra una nueva élite plebeya que no formaban parte aún de la nobleza. Más adelante analizamos la disposición, no obstante vid. complementariamente HUSBAND (1915), 376. HUSBAND (1916a), 536. FASCIONE (1981), 278. DUPLÁ (2003), 134. ARBIZU (2000), 38 y 39. SALERNO (1999), 57 y 58.

*Sextiae* en el aspecto político no fue completo: por un lado, no trajeron consigo la desaparición de la distinción entre los dos órdenes, pues patricios y plebeyos conservaron sus rasgos de identidad social<sup>30</sup>, sus muy distintos intereses y las desigualdades económicas se acrecentarían con el paso del tiempo; por otro, con la integración de los plebeyos ricos en la nobleza romana la gran masa ciudadana siguió estando sometida al gobierno de una aristocracia, que no tardaría mucho en transformarse en oligarquía, aunque en ella hubiesen ahora ciudadanos plebeyos. Si en algún momento dio la impresión que las *leges* eran una conquista democrática<sup>31</sup>, lo cierto es que no lo fueron completamente, porque ni el sistema sufrió variaciones determinantes ni las personas llamados a dirigirlo variaron sustancialmente su forma de hacer política. La estructura de las instituciones republicanas favorecía la concentración del poder entre las grandes familias aristocráticas<sup>32</sup>. Igual que hablamos de un Estado Patricio-Plebeyo desde las Licinias-Sextias, constatamos igualmente el nacimiento de una nobleza patricio-plebeya tras su promulgación<sup>33</sup>.

4. El resultado más visible fue, pues, la formación de la nueva *nobilitas* republicana, caracterizada ahora por tener un marcado signo político<sup>34</sup>. El vocablo *nobilis*<sup>35</sup> se empleaba para designar aquello que era *conocido, célebre, famoso* y puesto en relación con las personas en el lenguaje cotidiano mentaba al personaje *ilustre*<sup>36</sup>. No fue un término usado en sentido técnico para referirse a una determinada clase social: más bien, describían (*nobilis, nobiles* y *nobilitas*) una determinada posición en la sociedad<sup>37</sup>. Si exceptuamos la ancestral edad de nuestra civilización en que la posición económica determinaba la pertenencia a un grupo social elevado conocido como *nobleza*<sup>38</sup>, reproducido en los orígenes de Roma en un grupo de personas que detentaban la tierra (los patricios), en la República media la celebridad se conseguía a través de los logros militares y el protagonismo político y social en la *urbs*. Anteriormente, el desempeño de una magistratura curul confería al *civis* y sus familiares el carácter de *nobilis*, pero los sustanciales cambios que se fueron produciendo en el modelo de Estado tras las *Liciniae-Sextiae* y desde la segunda mitad del s. III (nacimiento del Estado territorial romano), indican que el círculo de la nobleza se fue estrechando y que pasaron a disfrutar de la condición de *nobilitas* únicamente las familias que hubiesen detentado en

30 CERAMI/CORBINO/METRO/PURPURA (2006), 39.

31 Así lo piensa GUARINO (2006), 27 y 28.

32 VINCENTI U. en SCHIAVONE (2005), 60.

33 CORNELL (1999), 393 y 394. MASIELLO (2011), 37. CAPOGROSSI COLOGNESI (2009), 97 y 149 ss.

34 BURDESE (1972), 63 y 64. CORNELL (1999), 393 ss. FERNÁNDEZ DE BUJÁN (2010), 56. ARBIZU (2000), 8 y 9.

35 Su significado en GELZER (1975), 27. BRUNT (1982), 1 ss.

36 Y en época de Plauto (s. III/II a.C.) también al *aristócrata*, según se deduce de algunos pasajes de sus comedias: v. gr., en *Rud*, 933a: *ubi nobilitas mea erit clara...* (cuando mi celebridad sea grande); en el sentido de aristócrata o perteneciente a las grandes familias: *Cist*, 125: *adulescens quidam hic est adprime nobilis...* (aquí vive un joven de la más alta nobleza); *Cist*, 130: *summo genere...* (de muy noble familia). *Capt*, 299: *quam volui sedulo meam nobilitatem occultare et genus et divitias meas...* (quise ocultar por todos los medios mi nobleza, mi linaje y mis riquezas).

37 MILLAR (1984), 11.

38 CASTÁN (2007), 889 y 892.

algún momento la máxima magistratura<sup>39</sup>. De forma que *nobilis* empezó a designar tanto al patricio como al plebeyo –y sus descendientes<sup>40</sup>– que hubiesen alcanzado el consulado<sup>41</sup>. Si la aristocracia senatorial, formada ahora por patricios y plebeyos pues el desempeño de cualquier magistratura posibilitaba el ingreso en el Senado, representaba ya por sí un número más que modesto del cómputo de la población romana –recuérdese que en esta época el Senado estaba formado por unos trescientos miembros–, el grupo de la *nobilitas* era todavía mucho más restringido, estimándose a través de los datos de los *Fasti consulares* que tan sólo una veintena de esas familias senatoriales pertenecientes a unas pocas *gentes* antiguas y nuevos plebeyos formaban el círculo exclusivo de la nobleza romana<sup>42</sup>.

5. Puesto que eran pocos los pertenecientes a este selecto grupo que año tras año se iban turnando en los principales puestos y militares –siempre con la necesaria puntualización de que los obtenían por elección popular<sup>43</sup>, ya que la condición de *nobilis* se transmitía de padres a hijos pero no así los cargos<sup>44</sup>– no sorprende que se formara de modo natural una oligarquía política cuyo radio de monopolio e influencia perduraría –o pretendería hacerlo– hasta el final de la República. La transformación de la *nobilitas* patricio-plebeya en oligarquía dio comienzo a mediados del s. III como consecuencia de la primera victoria sobre Cartago y el inicio del imperialismo romano por la cuenca mediterránea<sup>45</sup>. El nuevo escenario geográfico por el que Roma podía ya moverse libremente le permitió adueñarse, merced al esfuerzo militar, de un ingente caudal de riquezas, territorios y personas (esclavos), que inevitablemente cambiaron su fisonomía, la economía y la forma de hacer política. El gobierno del naciente imperio proporcionaba a su élite militar<sup>46</sup>, la nobleza y el orden ecuestre<sup>47</sup>, la obtención de inmensas fortunas para sus familias tan cuantiosas como las que llegaban a la *res publica*. Si la magistratura había constituido principalmente desde antiguo un honor, desde ahora el interés económico inyectaría en el ánimo de los próceres muchas más razones para competir por todas ellas. El círculo de la nobleza se blindó a nuevas incorporaciones y un escaso número de casas aristocráticas se repartirían

39 NICOLET (1977), 732. ARBIZU (2000), 10, estima que fue a partir del s. II a. C. cuando se produjo el cierre de la *nobilitas* en torno a las familias consulares. En igual sentido MASIELLO (2011), 37 y 38. Cicerón en numerosos pasajes indicaba que de la *nobilitas* formaban parte aquellos que contaran con un cónsul entre sus antepasados. Vid. GELZER (1975), 28 ss.

40 NICOLET (1977), 731.

41 Cf. BRUNT (1971), 67. BRUNT (2004), 8: los descendientes de pretores y ediles curules también entraban en la categoría de *nobiles*.

42 SYME (1939), 18 ss. DE MARTINO (2003a), 80 y 81.

43 No obstante, hace bien recordándolo MILLAR (1984), 10, cuanto más alto hubiese llegado un antepasado en la carrera política, más posibilidades tenían sus descendientes de emularle.

44 Ningún romano podía sentarse en el Senado por derecho hereditario: WISEMAN (1971), 95.

45 CASSOLA (1962), 399. DE SANCTIS (1923), 486 ss. HOMO (1962), 133. WIRSZUBSKI (1950), 33 ss. KOVALIOV (1979), 113 ss. GUARINO (1975), 242. ROLDÁN HERVÁS (1984), 69. ALFÖLDY (1996), 40 ss. VINCENTI U. en SCHIAVONE (2005), 61.

46 GARLAN (1975), 85.

47 CAPOGROSSI COLOGNESI (2009), 211.

el consulado a lo largo de los siguientes cien años<sup>48</sup>, consolidando un gobierno oligárquico no exento de rivalidades y tensiones ya que se disputaban los mismos cargos<sup>49</sup>.

Por oligarquía, parafraseando a Brunt<sup>50</sup>, puede entenderse el gobierno<sup>51</sup> de un círculo restringido de individuos cuyos privilegios los han alcanzado por nacimiento o por riqueza y que sólo responden ante ellos mismos<sup>52</sup>. El término deriva del griego *oligarkhia* (de *oligos*, pocos, de donde *gobierno de unos pocos*) y como forma de dirección política era ya suficientemente conocida en la Antigüedad<sup>53</sup> y desde luego fue centro de miras de la filosofía política aristotélica<sup>54</sup>. El Estagirita entendía la oligarquía como una degeneración de la aristocracia (el gobierno de los mejores), que junto a la monarquía y la democracia conformaban las tres grandes formas de gobierno. Una forma basada en el poder que confería la riqueza<sup>55</sup> y en la observancia de políticas defensivas para la protección de aquélla<sup>56</sup>. Oligarquía como sinónimo de ambición de poder de una minoría privilegiada que establecía sus propias reglas y modos de vida en las sociedades que regentaban<sup>57</sup>. En la experiencia romana, el predominio de la oligarquía se fundaba en el prestigio militar<sup>58</sup> de sus integrantes y en la fortuna que acumularon a raíz del expansionismo propiciado por el final de la Primera Guerra Púnica. La evidencia de ser superiores a sus conciudadanos en el aspecto económico les llevó a creer serlo igualmente en todo lo demás<sup>59</sup>, y así, los privilegios jurídicos y religiosos que habían constituido la base de su preeminencia hasta entonces, perdieron importancia frente al poder económico y militar<sup>60</sup>. La oligarquía contaba con una posición de autoridad firmemente enraizada en el sistema político<sup>61</sup>. Tenía un control casi absoluto sobre todas las instituciones y en sus filas no sólo había magistrados y militares, sino también sacerdotes, senadores e incluso los propios representantes del pueblo, los

48 DE SANCTIS (1923), 486 y 487. OGILVIE (1980), 40 ss. NICOLET (1964), 15 y 16.

49 GOLDSWORTHY (2008), 45 y 46.

50 BRUNT (2004), 6 ss. Igualmente WINTERS (2011), 1 ss. Definición también en Pol. 6.4.

51 Oligarquía como forma de gobierno y no como forma de Estado: GUARINO (1979), 31.

52 Indudablemente no podemos aceptar la falta de responsabilidad como una nota de la oligarquía romana (tampoco es ésa la intención de Brunt, pues habla de oligarquía en parámetros comunes a cualquier régimen antiguo), pues los magistrados romanos respondían civil y penalmente por todo aquello que en el ejercicio de su cargo cometieran contrario a derecho: la *perduellio* (más adelante, *crimen maiestatis*) o el *crimen repetundarum* son claros ejemplos (en profundidad LICANDRO (1999), *passim*. TORRENT (1995), 151 ss.). No puede olvidarse, asimismo, que si su elección se había producido de forma fraudulenta cabía una acusación de *ambitus* con las consecuencias que van a verse a continuación.

53 DAHL (2004), 14. LINTOTT (1992), 114 ss.

54 Véase MULGAN (1991), 307 ss.

55 Arist., *Pol.*, 1279b; 1280a; 1294a.1301a y b. La diferencia entre democracia y oligarquía, escribía el Estagirita, es la pobreza y la riqueza. FINLEY (1985), 3 ss.

56 WINTERS (2011), 7. GABBA (1981), 541 ss.

57 ARCE (2010), XIII.

58 BRUNT (2004), 44. Cf. Cic., *de off.*, 1.22.

59 LINTOTT (1992), 116. WOOD (1988), 91 ss.

60 CASSOLA (1962), 401. ROLDÁN HERVÁS (2008), 44 y 45.

61 NORTH (1990), 16.

tribunos<sup>62</sup>. Cuando el tribunado se integró en el resto de magistraturas ordinarias romanas pasó a ser un instrumento de la oligarquía senatorial<sup>63</sup> –como escribe Wirszubski, la más sólida base del poder senatorial en el Estado<sup>64</sup>– y una plataforma política en manos de los jóvenes nobles plebeyos<sup>65</sup> que aspiraban alcanzar el consulado, con vistas más a satisfacer intereses personales que generales<sup>66</sup>. El efecto en la República fue devastador: dejando a un lado una serie de lecturas políticas que desarrollamos en las siguientes páginas, el gobierno oligárquico acentuó todavía más las desigualdades sociales y la *nobilitas* perdió todo contacto con las exigencias, los intereses y los sentimientos del *populus*<sup>67</sup>. Una nobleza disoluta y en clara decadencia moral<sup>68</sup>: este es el retrato que pintará posteriormente Salustio de la clase política de aquel tiempo, a la que imputa el origen de todos los males de la República<sup>69</sup>.

6. La particularidad de la constitución republicana invita a plantearse una serie de interrogantes. Los cónsules, como el resto de magistrados, desempeñaban sus funciones de mando político y militar únicamente durante un año, salvando la situación excepcional pero frecuente de la *prorrogatio imperii*, así que en términos políticos su autoridad se desplegaba en un espacio temporal relativamente corto. En tan breve plazo era muy difícil establecer políticas duraderas, más conociendo que los candidatos consulares no optaban a la magistratura apoyándose en un programa electoral<sup>70</sup> sino en su personalidad pública y militar<sup>71</sup>. Entonces, ¿quién dirigía propiamente la política romana? ¿Quién fijaba la dirección política de la *libera res publica* a medio y largo plazo? Es evidente que era el Senado por ser un órgano permanente que no estaba limitado por plazos perentorios de pérdida del poder. Junto con los cónsules anuales, que eran coyunturales, la vieja asamblea de los *patres* gobernaba Roma con la legitimidad de una tradición centenaria en virtud de su *auctoritas*<sup>72</sup>. Era el único lugar en Roma en que hombres con experiencia en el plano político y militar

62 HÖLKESKAMP (2010), 1. KUNKEL (1989), 31. ROLDÁN HERVÁS (1984), 83.

63 SCULLARD (2011), 7. ADCOCK (1964), 43 y 45. ARBIZU (2000), 38. BURDESE (1972), 90.

64 WIRSZUBSKI (1950), 33.

65 Recuérdese la singularidad de esta magistratura: estaba prohibida a los patricios, pero se permitía la *transitio ad plebem* de un patricio para poder ocuparla. GUARINO (1975), 246.

66 CASSOLA (1962), 10 y 11.

67 Sall., *Iug.*, 41. CASSOLA (1962), 400. MONTESQUIEU (1984), v. 1, 114 y 115.

68 De aristocracia corrupta habla BETTI (1982), 25 ss.

69 No debe dejar de leerse: Sall., *Cat.*, 10–14; igualmente *Iug.*, 41. El ataque a la oligarquía por parte de Salustio no tiene desperdicio, ya que es escrito por un aristócrata corrupto (Dion Cass. 43.9.2) que tras el asesinato de César quiso mostrar su lado más crítico y moralizador frente a la corrupción y la ambición de la *nobilitas*. La arrogancia de la oligarquía queda retratada en muchos pasajes más: *Iug.*, 5.1; 31; 41; 42 ss. *Cat.*, 6 ss.; 36–39.

70 Vid. TORRENT (2012), 49 ss.

71 Vid. TAYLOR (1984), 23. BRUNT (2004), 43. SYME (1939), 11. MILLAR (1984), 9. ROLDÁN HERVÁS (1984), 75. FINLEY (1985), 144. GOLDSWORTHY (2008), 46.

72 Cic., *Sest.*, 137. DE SANCTIS (1923), 499. TAYLOR (1984), 6. BREONE (1989) 125. SYME (1939), 10. GRUEN (1974), 162 ss. WIRSZUBSKI (1950), 32 y 33. FINLEY (1985), 132. HOMO (1962), 133. ROLDÁN HERVÁS (1984), 76. WOOD (1988), 23, 24 y 27. CERAMI/PURPURA (2007), 136. BRUNT (1966), 4. ADCOCK (1964), 41 ss. Escéptico ante esta afirmación se muestra MILLAR (1998), 209, en el marco de un trabajo centrado en resaltar el poder del *populus*.

podían discutir los asuntos de Estado y prestar el oportuno asesoramiento a los magistrados<sup>73</sup>. Al fin y al cabo, la práctica totalidad de los senadores eran ex magistrados<sup>74</sup>, así que estaba garantizada la emisión de consejos expertos. Dentro del Senado tenía cabida el grupo de la *nobilitas*, el puñado de senadores que habían detentado el *imperium* consular en alguna ocasión, la oligarquía, quienes eran los primeros en hablar, en emitir sus opiniones, y por tanto tenían un radio de influencia enorme<sup>75</sup>.

7. La constitución política romana permitía, teóricamente<sup>76</sup>, el acceso a las magistraturas de cualquier *civis*, pero en la práctica era imposible para la mayoría de la ciudadanía. El *cursus honorum* establecía una serie de requerimientos de tipo legal fijados por distintas providencias que no tenían elementos discriminatorios o excluyentes, pero desde antiguo se habían impuesto ciertos requisitos de idoneidad en los candidatos<sup>77</sup> – *fama*, experiencia, *dignitas*, patrimonio, el recuerdo (*imagen*) de sus antepasados<sup>78</sup>– que sólo estaban al alcance de los miembros de unas pocas familias, quienes además mostraban una fuerte resistencia a permitir la incorporación de nuevos ciudadanos a la élite gobernante. Los *homines novi*, aquellos aspirantes a formar parte del círculo restringido de la oligarquía sin contar con antecedentes familiares<sup>79</sup>, podían labrarse un presente con la intención de perdurar en el tiempo, pero carecían de *imagines maiorum* que mostraran los servicios de sus familias a la colectividad<sup>80</sup>. En esto se diferenciaban nobles y nuevos políticos: los primeros debían su posición a la antigüedad de su linaje político y al carácter hereditario del mismo<sup>81</sup>; los segundos eran políticos que se habían hecho a sí mismos sin tener el apoyo de una familia consular. La oligarquía controlaba<sup>82</sup> férreamente la carrera política y premiaba a los suyos (el sistema electoral también les beneficiaba), lo que a la postre significaba tener el monopolio de las magistraturas y especialmente del consulado<sup>83</sup>. Resultado de esto es que a lo largo del s. II a. C., según ha estudiado Wiseman<sup>84</sup>, sólo cinco cónsules están atestiguados en las fuentes como *homines novi*<sup>85</sup>. No es que los *homines novi* representasen una oposición a la *nobilitas* en el sentido de propugnar políticas diferentes en la República

---

73 LINTOTT (1999), 86.

74 Desde la *Lex Ovinia* (probablemente del 312 a.C.).

75 TAYLOR (1984), 3.

76 HÖLKESKAMP (2010), 78. CAPOGROSSI COLOGNESI (2009), 149 ss.

77 Léase la defensa de Cicerón a *Murena*, *passim*, pues constituye un decálogo de los méritos que había de reunir un candidato. WOOD (1988), 91 ss. YAKOBSON (1999), 109 ss. De *meritocracia* habla HÖLKESKAMP (2010), 93.

78 Sall., *Iug.*, 63.

79 *Homo novus*, siguiendo a WISEMAN (1971), 1, podía designar tanto al cónsul o candidato consular cuyos ancestros no habían alcanzado tal dignidad, como al senador de clase ecuestre que no contaba con antepasados en esa cámara.

80 Interesantísimo es, a este respecto, Cic., *de leg. agr.*, 2.1. Igualmente véase Sall. *Iug.*, 85.

81 DE SANCTIS (1907), 236. SALERNO (1999), 169.

82 NARDO (1970), 61 y 62.

83 HUMBERT (1991), 206 y 207. GRUEN (1974), 3. Cic. *de leg. agr.*, 2.1 *in fine*.

84 WISEMAN (1971), 3.

85 Cf. CASSOLA (1962), 399 y 400.



(si exceptuamos algún caso notorio como el de C. Mario); su interés se dirigía sobre todo a formar parte de ese círculo restringido y a disfrutar de los privilegios que comportaba dicha pertenencia<sup>86</sup>. Así que su ostracismo no se debía a razones de índole política o ideológica, sino a fundamentos de conservación del poder oligárquico.

8. Este estado de cosas se mantuvo prácticamente hasta la segunda mitad del s. II a. C. Las últimas décadas de ese siglo serían testigo de la entrada en acción de un nuevo grupo de políticos que desde dentro de la aristocracia senatorial pero apoyándose más en el pueblo y en sus tribunos, promovieron otra forma de hacer política, a veces simplemente demagógica, otras con la implantación de medidas ciertamente democratizadoras, pero siempre con la intención de debilitar el gobierno tradicional oligárquico<sup>87</sup>. Eran los *populares*. Teóricamente opuestos a los senadores conservadores (*optimates*) que se resistían a cualquier apertura o reforma de la constitución republicana<sup>88</sup>, pertenecían sin embargo a la misma clase social que ellos, la nobleza, de forma que *optimates* y *populares* formaban dos *facciones*<sup>89</sup> dentro de la aristocracia senatorial y la *nobilitas*. La época de los hermanos Graco constituye el momento en que esta división se hace patente en la vida pública romana<sup>90</sup>, coincidiendo con el decline de la oligarquía y el ascenso de los *equites*<sup>91</sup>, y alcanzará su punto culminante con la pugna lidiada entre dos personajes fundamentales de este período histórico: Mario (popular) y Sila (conservador).

La dictadura de Sila y las reformas que seguidamente emprendió perseguían una restauración<sup>92</sup> del sistema oligárquico y durante un breve período pareció conseguirlo. Para ello reforzó el papel del Senado, aumentando el número de senadores y devolviéndole la facultad de componer los jurados en las *quaestiones*, remodeló el *cursus honorum* y el sistema de votación en los comicios centuriados y vació de poder la magistratura que podía controlar o entorpecer el funcionamiento de la cámara: el tribunado de la plebe<sup>93</sup>. Fue un golpe a los *populares*, a los *equites* y a las reformas democráticas emprendidas medio siglo antes cuando los tribunos, aunque no todos<sup>94</sup>, se convirtieron en instrumentos eficaces de la revolución democrática<sup>95</sup>, dejando atrás su vieja colaboración institucional con el Senado

86 Vid. BRUNT (2004), 43.

87 SCULLARD (2011), 6. DE MARTINO (2003a), 81 y 82. KUNKEL (1989), 31.

88 PINA POLO (1999), 79 y 80.

89 Según el conocido texto de Cicerón (*de rep.*, 3.13.23).

90 SCULLARD (2011), 32. KUNKEL (1989), 53 y 54. BURDESE (1972), 147 ss. TORRENT (2012), 19 ss.

91 HOMO (1962), 147 ss.

92 SYME (1939), 7 y 61. TORRENT (1995), 189. NICOLET (1964), 31 ss. CERAMI/CORBINO/METRO/ PURPURA (2006), 99 ss.

93 En una serie de reformas de alto calado: baste recordar a estos efectos la *Lex Cornelia de magistratibus* y la *Lex Cornelia de tribunicia potestate*, ambas del a. 82 a. C. ROTONDI (1990), 351, no descarta que las dos disposiciones constituyan una única *lex*. Léase el diálogo entre los hermanos Cicerón, conservadores ambos, sobre los poderes y excesos de la *tribunicia potestas* en Cic., *leg.*, 3.8.19 ss. Y, en general, sobre las reformas silanas DE MARTINO (1973), v.3, 92 ss. BISCARDI (1987), 147 ss. DE LAS HERAS (1989), 35 ss. SCULLARD (2011), 52 ss. CAPOGROSSI COLOGNESI (2009), 249 ss.

94 PINA POLO (1994), 84 y 85.

95 TAYLOR (1962), 19. ARBIZU (2000), 41.



enfocada a la conservación del orden establecido<sup>96</sup> (oligarquía). Para sus propósitos, Sila no sólo se rodeó de *nobiles* pertenecientes al partido conservador<sup>97</sup>, sino que también quiso atraer al sistema a jóvenes *popularis* como César<sup>98</sup> mediante una alianza matrimonial que César, osadamente, rehusó. Sería precisamente este patricio, Cayo Julio César, el adalid de una nueva generación de *optimates* que tampoco lograría rebajar las disensiones en el seno de la última *nobilitas* republicana. Su asesinato en el año 44 y los posteriores acontecimientos que propiciaron el ascenso imparable de Octavio (Augusto) en el panorama político pusieron fin a la República dando lugar a un nuevo régimen, el Principado, que adoptó la forma de una monarquía (encubierta) liberal<sup>99</sup>.

9. No quisiera terminar este primer punto sin hacer un breve recordatorio de las posiciones doctrinales tradicionales y modernas sobre las cuestiones aquí mencionadas. En el campo de la historiografía romana, el carácter oligárquico de la República comienza a ser destacado desde mediados del siglo XIX, en consonancia con el pensamiento neoliberal y las luchas de clases de aquella época, siendo su primer exponente el gran Theodor Mommsen en su inmortal *Römische Geschichte* (1854-56)<sup>100</sup>. La idea que tenía el Nobel alemán de la República romana es más que conocida, centrada en presentarla como una forma aristocrática y oligárquica donde el poder del pueblo quedaba muy difuminado y empequeñecido ante la presencia omnipresente del Senado y sus miembros en el devenir de la política. Un planteamiento similar, auxiliándose fundamentalmente en un método prosopográfico<sup>101</sup>, seguirían otras obras capitales ya en el siglo XX (sin olvidarnos de *La Cité Antique*, de Fustel de Coulanges, 1864), conservando la base de la existencia de una oligarquía pero a la que fueron sumándose otros aspectos y caracteres fundamentales que dibujaron con mayor riqueza la naturaleza especial de la élite política romana y, por ende, del sistema republicano, entre los que son reseñables la división interna de la *nobilitas* en el último período en los dos conocidas partidos de *optimates* y *populares*, las alianzas familiares, el papel de las clientelas sociales y políticas, etc.: de obligada mención son *Die Nobilität der römischen Republik* (Matthias Gelzer, 1912), *Römische Adelsparteien und Adelsfamilien* (Friedrich Münzer, 1920), *The Roman Revolution* (Roland Syme, 1939)<sup>102</sup>, *Party*

96 SCULLARD (2011), 7. DUPLÁ (2003), 137.

97 SYME (1939), 7.

98 TAYLOR (1942), 5.

99 KUNKEL (1989), 55.

100 No puede olvidarse el imponente trabajo historiográfico de B.G. Niebuhr, precursor del auge de los estudios publicistas que vendrían después. Una síntesis puede verse en FUENTESECA (2009), 47 ss,

101 El apoyo en la prosopografía para el análisis de esta época (siglos III-I a. C.) es un instrumento válido pero ha de ser utilizado con moderación. Es cierto que la historia de la Roma medio y tardorepublicana es en gran parte la historia de los hombres que la condujeron y la prosopografía estudia a esos individuos (o grupo de ellos), pero atendiendo más a la circunstancia personal que a la coyuntura general. Basar el estudio de la República exclusivamente bajo este método conduce a conclusiones erróneas, puesto que las informaciones de tipo personal y militar de los protagonistas tienen preponderancia frente a otros factores, como el social y el económico, que apenas son tenidos en cuenta. Vid. MOMIGLIANO (1940), 77 y 78. PINA POLO (1994), 69 y 70. CASSOLA (1962), 22.

102 En su momento la obra de R. Syme causó un gran impacto y todavía hoy su lectura es abrumadora en muchos sentidos. Procúrese leer el preclaro prólogo de Javier Arce a la reciente edición en español en el que advierte de

*politics in the age of Caesar* (Lilly Ross Taylor, 1949), *Foreign Clientelae (264-70 B.C.)* (Ernst Badian, 1958), entre los más representativos<sup>103</sup>.

Naturalmente, defender la existencia de una oligarquía en una sociedad como la romana que votaba todos los años las magistraturas conduce irremediabilmente al reconocimiento de que el sistema electoral beneficiaba a la élite política y social y, por tanto, que la influencia que poseía el grueso de la ciudadanía popular en las elecciones era bastante limitada<sup>104</sup>. Como consecuencia de ello se tiende a discutir, cuando no sencillamente negar, el carácter democrático de la República romana<sup>105</sup>, algo que ha posibilitado abrir una nueva línea de investigación especialmente fructífera y sugerente en los últimos cuarenta años y reactivada en gran medida merced a las contribuciones de Sir Fergus Millar (paradójicamente, por su orientación científica, discípulo de Sir Ronald Syme), que se ha dirigido fundamentalmente a resaltar el papel del *populus* en la constitución política y presentarlo como un serio contrapunto al poder de la clase dirigente<sup>106</sup>. El hilo argumental de esta corriente tiene la pretensión de dibujar un Estado republicano más democrático del que se deducía de los estudios decimonónicos y de la primera mitad del siglo XX, remarcando ciertos aspectos que habían sido poco valorados como la participación popular en los comicios (especialmente en los *tributa*) o la recuperación del tribunado de la plebe como magistratura opositora al Senado en el último tercio del s. II a. C. tras casi dos siglos de colaboración interesada con la *nobilitas* romana. Con estas y otras bases debería ser más fácil reflejar ese carácter, esto es, el de un sistema mucho más democrático que atenuara la imagen oligárquica de la República<sup>107</sup>, y en parte se ha conseguido, pero es muy significativa una de las conclusiones a la que llega Millar y que debe ser el punto de partida para introducirse en esta cuestión: "*we may still not want to characterize this as*

---

los defectos y excesos del libro al mismo tiempo que recuerda sus indiscutibles y numerosos méritos: ARCE (2010), VII-XVIII.

103 Puede verse un resumen de los principales puntos de estas obras en CASSOLA (1962), 5 ss. LINTOTT (1999), 167 ss. NORTH (1990), 6 y 7.

104 Vid. en YAKOBSON (1999), 20 n. 1, una completa relación de autores que opinan que el voto popular no tendría gran valor en la praxis.

105 Como bien advierte el insigne politólogo N. BOBBIO (2007), 17, la permanencia en el poder de una oligarquía o élite política se opone a los ideales democráticos.

106 La obra más significativa del ilustre historiador oxoniense es *The crowd in Rome in the Late Republic* (1998), pero otros trabajos suyos abordan la misma cuestión siempre orientada a resaltar la influencia del *populus* en el sistema republicano romano: v. gr., MILLAR (1984), (1986) y (2002). Esta interesantísima temática ya había sido abierta antes de Millar por otros romanistas e historiadores, pero la reacción a los argumentos de Sir Fergus ha sido muy notable, tanto a favor como en contra de los mismos. A este respecto, vid. BRUNT (2004), 6 ss. y 143 n. 5. BRUNT (1971), 8, 9 y 46. NORTH (1990), 8 ss. y 14 (con lit. en p. 8 n. 18). YAKOBSON (1999), 20 ss. LINTOTT (1984). LINTOTT (1999). GUARINO (1979), *passim*. GUARINO (2006), p. 1 n. \* (extensa relación bibliográfica sobre la democracia romana de 1940 en adelante) y *passim*. FUENTESECA (2009), 151 ss. HÖLKESKAMP (2010), 1 ss. DE MARTINO (1972), v. 2, 455 ss. DE MARTINO (2003b), 107 ss. TORRENT (1995), 234 ss. OLBRY/SAMARAS (2007), 111 ss. CASSOLA (1962), 12 y 13. RIBAS ALBA (2009), XXI, XXII, *passim*. GRUEN (1974), 121. PINA POLO (1997), 14 y 18 ss. PINA POLO (1994), 80. MOURITSEN (2001), *passim*.

107 MILLAR (2002), 178 ss.

*democracy*"<sup>108</sup>. Por más que se trate de un tema apasionante, de esos que puede decirse que están *de moda* en la actualidad<sup>109</sup>, no podemos por razones de espacio siquiera hacer un breve comentario sobre el mismo, precisamente porque no es una cuestión que pueda ser ventilada en unas pocas líneas. Remito al interesado a los trabajos citados hace bien poco (nota 106) en los que puede encontrarse bibliografía exhaustiva y, no obstante, advierto de que en los dos siguientes epígrafes la existencia (o no) de la democracia romana puede inevitablemente deducirse de lo que va a exponerse.

10. En todo caso, no cabe sino felicitarse por esta nueva línea de investigación que ha conseguido integrar en la historia política de Roma los dos mundos sociales que formaban todo su complejo universo. Porque, sin duda, en el seno de la plebe encontramos otra *Historia de Roma*. La que conocemos por las fuentes (directas e indirectas) es aquella que nos han narrado los analistas, intelectuales e historiadores que tuvieron en su punto de mira, especialmente en los que se refiere a la República, la vida, costumbre y principios de la alta sociedad romana<sup>110</sup>. Los ideales y tradiciones de ese grupo minoritario han terminado por ser asociados a los propios de Roma como cultura e Imperio. Es cierto que esta clase dirigente contribuyó con su sangre, competencia, fortuna e ingenio al engrandecimiento del Estado romano<sup>111</sup>. Transformaron una pequeña ciudad mediterránea en un vasto y poderoso Imperio cuya influencia se dejó sentir en tres continentes. Pero no lo hicieron solos. Las clases populares contribuyeron también, en la medida de sus posibilidades, a construir la grandeza de Roma. Todavía está por escribir una Historia de Roma narrada desde el punto de vista de las clases menos afortunadas de su sociedad, las que constituían el grueso de su población. Los plebeyos, los humildes o la *gente corriente* (*ordinary people, invisible romans*) de la que habla Knapp<sup>112</sup>, convivían en aparente sintonía con la aristocracia y la nobleza, cuando las costumbres, el estilo de vida, las tradiciones, las inquietudes y, desde luego, las esperanzas y anhelos eran muy diferentes entre ambos. Pero los dos estamentos se necesitaban mutuamente. Sorprende y tiene que ser objeto de rechazo una comparación tan descarnada e injustificada entre los dos grupos como la efectuada por Fustel De Coulanges<sup>113</sup>, seguramente influido por Livio, quien se refería a la plebe como "*una población despreciada y abyecta, fuera de la religión, fuera de la ley, fuera de la sociedad y fuera de la familia. El patricio sólo puede comparar esta existencia con la de la bestia: more ferarum. El contacto del plebeyo es impuro*". Nada más lejos de la realidad<sup>114</sup>: salvando las distancias de sus respectivos modos de vida que estaban irremediabilmente ligados a la fortuna de

---

108 MILLAR (1984), 19.

109 Sobre el que me he pronunciado en un trabajo actualmente en prensa: CASTÁN (2012).

110 OGILVIE (1980), 12.

111 CAPOGROSSI COLOGNESI (2009), 149.

112 KNAPP (2011), 9. El título original de la obra, *Invisible Romans*, pone de manifiesto lo que apuntamos más arriba, la existencia de una inmensa mayoría de ciudadanos que prácticamente pasaron desapercibidos –invisibles– en las principales fuentes literarias.

113 FUSTEL DE COULANGES (1947), 296.

114 PUCCI (1989), 385.

que disfrutaban unos y otros, los plebeyos formaban sus familias, tenían cultos religiosos, interactuaban con los patricios, servían en el ejército y desarrollaban todas aquellas actividades y oficios que los patricios despreciaban de forma hipócrita por el influjo de las teorías aristotélicas primero y epicúreas después y sin las cuales, sin el trabajo de estas personas, la sociedad romana habría tenido grandes carencias. De forma que la incapacidad de un amplio sector de la aristocracia romana para admitir cambios institucionales (políticos y sociales) que tuviesen en su punto de mira el progreso y bienestar de ese numerosísimo grupo de personas, terminó por convertirse en una de las causas principales del fin de la República<sup>115</sup>.

## II. AMBITUS. REGULACIÓN JURÍDICA

11. Todo sistema político que contemple en mayor o menor medida algún procedimiento de participación ciudadana en forma de elección popular debe velar por la transparencia del mismo<sup>116</sup>. Cuando este no es capaz de garantizar la limpieza de esos mecanismos, la voluntad popular, máxima expresión de un régimen que predique su carácter democrático, pierde todo su valor, bien porque no haya podido ser expresada en condiciones de libertad (violencia), bien porque haya sido modificada por prácticas ilícitas intencionadas (secuestrada), como consecuencia de diferentes formas de corrupción. En ambos casos, pero significativamente en el segundo, si los medios son practicados por la élite gobernante, la conclusión más clara es que las instituciones políticas y electorales han sido utilizadas en defensa de intereses personales, por lo general una oligarquía que busca la conservación del poder. En Roma se dio mucho de esto. Puede aceptarse el hecho de que existió un Derecho electoral en el sentido de que hubieron normas desde una temprana época, sucesivamente reformadas en tiempos posteriores, por las que se regulaban los procedimientos electorales y los distintos sistemas de votación, los derechos de sufragio activo y pasivo, los mecanismos para la denuncia de presuntas irregularidades, etc.; pero se debe también reflexionar si ese Derecho tenía entre sus finalidades la culminación de unos ideales decididamente democráticos o si no era, simplemente, un instrumento legal en el que la *nobilitas* gobernante legitimaba su continuidad y que burlaba cuando la ocasión lo requería. Todavía no estamos hablando propiamente de corrupción electoral, pero recuérdese que la constitución republicana había puesto en manos de sus magistrados y del Senado ciertos mecanismos que presuntamente defendían el ordenamiento cuando lo cierto es que protegían los intereses de la *nobilitas*: anulación de elecciones, no proclamación de candidatos electos, confección de las listas electorales por parte del magistrado, exención de requisitos legales del *cursus honorum* a favor de ciertos candidatos, recurso a los *auspicia* desfavorables para cancelar o interrumpir elecciones, etc. Eran instrumentos legales que servían para controlar el acceso al poder de ciertos individuos que no estaban en la órbita política de la oligarquía, pero por el hecho

---

115 PINA POLO (1999), 79.

116 BOBBIO (2008), 16.

de ser legales no dejaban de constituir verdaderos abusos. Por otro lado, y retomando el hilo conductor inicial, el sistema perdía cualquier apariencia de credibilidad cuando todos, *nobilitas* y *novi homines*, *populares* y *optimates*, recurrían continuamente a la corrupción electoral como medio para perpetuarse en el poder o llegar a él y mantenerse. Y lo que es más grave: con la total complicidad del cuerpo electoral, el *populus*, para sostener ese círculo vicioso. Es paradójico que mientras más elementos democráticos se intentaban introducir en la constitución republicana (s. II y I a. C.), más se degradaba el sistema entero y la propia sociedad. Las primeras medidas contra la corrupción fueron anteriores pero tuvieron que ser renovadas con firmeza a principios del s. II a. C., dando lugar desde ese momento a una incesante producción legislativa para intentar frenar todos estos comportamientos y sancionar aquellas actuaciones que directa o indirectamente tenían el efecto de provocar un detrimento de la soberanía popular desde el mismo momento en que un candidato era elegido por la conjunción de determinados factores intencionados e ilícitos y no por la libre manifestación del voto<sup>117</sup>. Como tipo penal, las conductas anteriormente señaladas se englobaban bajo la denominación de *ambitus*<sup>118</sup> (*crimen ambitus*)<sup>119</sup>.

12. La aparición de una serie de conductas sospechosas en el comportamiento de los candidatos se remonta a las décadas siguientes a la aprobación de la Ley de las XII Tablas. La norma decenviral, tan prolífica en la regulación y represión de los delitos, incluidos los de carácter político, no contenía ninguna referencia al *ambitus* –no obstante la opinión de Mommsen en sentido contrario<sup>120</sup>– posiblemente porque en los albores de la República

117 FASCIONE (1984), 15. Cic. *Top.*, 4.24.

118 Varr., *de Ling. Lat.*, 5.22.; 5.28: *qui populum candidates circum it, ambit*. Fest., s.v. *ambitus* (5.9): *sed et eodem vocabulo crimen avaritiae vel affectati honoris appellatur*. Procede del verbo *ambire*, que significa "dar vueltas alrededor de" (*circum ire*) y se utilizaba para señalar el espacio libre que debía existir entre dos casas vecinas: vid. D.47.12.5 (*Pomp. 6 Plaut.*). Fest. s.v. *ambitus*: *Proprie dicitur circuitus aedificiorum patens in latitudinem pedes duos et semissem, in longitudinem idem quod aedificium*. Por traslación comenzó a utilizarse para indicar las prácticas habituales de los candidatos que rondaban a los electores en los lugares públicos pidiéndoles el voto. Originariamente *ambitus* no significaba *corrupción* ni la comisión de ninguna práctica ilícita, pero el lenguaje penal lo utilizaría para señalar la mala praxis de los candidatos para convencer a los votantes. ERNOUT/MEILLET (1951), 47. MOMMSEN (1985), t.2, 124 n. 3. RESINA (2011), 3 n.4. *Ambitus* está conectado también con el sustantivo *ambitio* que indica la búsqueda, probablemente excesiva, de fama política. Sobre esta última palabra: LEVICK (1982), 53 ss.

119 Existe abundante literatura romanística sobre el delito de *ambitus*, aumentado en las últimas décadas como consecuencia del auge que han experimentado los estudios sobre la democracia en Roma, el papel del *populus*, la *nobilitas*, etc. Entre los más significativos podemos señalar: LABOULAYE (1845), 282 ss. GENTILE (1879). FERRINI (1902), 420 ss. CHAIGNE (1911). MOMMSEN (1955), 865 ss. SHERWIN-WHITE (1956), 1 ss. COLI (1957a), 534 ss. GRUEN (1968). SHACKLETON BAILEY (1970), 162 ss. DE ROBERTIS (1971), 129 ss. GRIMAL (1975), 07 ss. FASCIONE (1981), 255 ss. *Idem* (1984). *Idem* (1988), 179 ss. SCHULLER (1982). VENTURINI (1984), 787 ss. CHENOLL ALFARO (1984), LINDERSKI (1985), 87 ss. McDONNELL (1986), 564 ss. DENIAUX (1987), 279 ss. LINTOTT (1990), 1 ss. BAUERLE (1991). YAKOBSON (1992), 32 ss. *Idem* (1999). MURGA (1992), 113 ss. WALLINGA (1994), 411 ss. NADIG (1997). SANTALUCIA (1998), 103 ss. SALERNO (1999). STOLLE (1999). LICANDRO (1999). GALLO (2000). MOURITSEN (2001). FERRARY (2001), 161 ss. DOSI (2004). KOWALSKI (2007-8), 29 ss. RIBAS ALBA (2009), 294 ss. RESINA (2011), 1 ss.

120 El maestro alemán sostuvo la existencia de una primitiva disposición sobre la compra de votos en el código decenviral, que además habría estado castigada con la pena capital: MOMMSEN (1955), 668, 868 y 874. No es opinión aislada, ya que DE SANCTIS (1907), v. 2, 235, aun sin entrar en la sanción penal, consideraba que la compra de votos entre las tribus tuvo que ser usual desde los primeros momentos. Mommsen se apoyó en tres textos: Pol.6.56, que, sin embargo, y por la fecha en la que escribió Polibio no podía estar remontándose a ninguna disposición de las XII Tablas sino a las más recientes *leges de ambitu* que se habían dado en 181y en 159 a.C. En segundo lugar,

quienes se postulaban para las magistraturas eran lo suficientemente conocidos en la comunidad –dada su condición (*nobiles*) y la reducida dimensión de la misma– como para contar con los apoyos necesarios y no tener que recurrir a actos deshonrosos o ilícitos que pusieran en peligro la integridad de las elecciones. Sin embargo, no es menos cierto que en esta temprana época comenzaron a practicarse acciones inusuales en la joven República romana. En 440 a.C., un miembro del orden ecuestre poseedor de una gran fortuna, Espurio Melio<sup>121</sup>, compró grano en Etruria para distribuirlo gratuitamente entre el pueblo en contra de los intereses del Senado. La dádiva le hizo ganar el favor de los plebeyos pero suscitó temor en los patricios que vieron en él un nuevo competidor por el consulado. No llegó a alcanzarlo y la historia terminó trágicamente para Melio, pues se difundió el rumor de que perseguía restaurar la monarquía en su persona y terminaría siendo asesinado<sup>122</sup>. La razón de traer el episodio a estas páginas es porque Melio se sirvió de una táctica en el empeño de ganar popularidad (con intenciones políticas) que luego se convertiría en habitual durante la República tardía: el reparto gratuito de alimentos entre los más necesitados.

13. Livio se refiere a la primera providencia que se dictó en relación con el *ambitus* poco tiempo después (a. 432). De sus palabras deducimos que no se trató de una disposición de carácter y efectos penales<sup>123</sup>, sino que se pretendía ajustar la *ambitio* (ambición política y propaganda) de los candidatos a unos parámetros de contención teóricamente iguales para todos. La iniciativa se aprobó<sup>124</sup> a propuesta de los tribunos, probablemente con la autorización del Senado a tenor del lenguaje de Livio<sup>125</sup>, lo que le daba eficacia general en virtud de la *Lex Valeria Horatia* (a. 449)<sup>126</sup>, y prohibía blanquear intencionadamente la toga de los aspirantes cuando se presentaran en público (la toga cándida de un color blanco reluciente<sup>127</sup>, de ahí el término *candidatus*): *Placet tollendae ambitionis causa*

---

Liv.9.26.9, que tampoco menciona expresamente las Tablas puesto que lo que se relata en ese pasaje es la constitución por parte del dictador Cayo Menio de un tribunal de investigación especial para enjuiciar a los magistrados de Capua (314/313 a.C.) y a ciertos miembros de la *nobilitas* romana que podían haber intrigado para obtener las magistraturas (*quaestio de coitiones honorum adipiscendorum*). Sin embargo, la gravedad de los hechos entiendo que excede del simple *ambitus*: SOLIDORO MARUOTTI (2001), 71. VENTURINI (1996), 112 ss. Como *quaestio de ambitu* FASCIONE (1984), 59, 127 y 128. Y, por último, Plin. *Nat. Hist.*, 35.12.62, del que tampoco puede deducirse, por su imprecisión, la existencia de dicha condena en el antiguo Derecho penal decenviral: COLI (1957a), 534.

121 Véase PAIS (1915), 60 ss. DUPLÁ (2003), 81 y 82. PUCCI (1989), 377.

122 Liv. 4.13 y 14.

123 Vid. MOMMSEN (1955), 866. NICOLET (1988), 298.

124 Se duda si el proyecto salió adelante o fue rechazado, o si simplemente se trata de una invención del analista: NADIG (1997), 17 ss. ROTONDI (1990), 211. DE SANCTIS (1907), v. 2, 235. FASCIONE (1981), 258–268 (bibliografía en p. 258 n. 7).

125 Véase FASCIONE (1981), 261.

126 Liv. 3.55.3. Plin. *Nat. Hist.*, 16.15.37: los cónsules Lucio Valerio y Marco Horacio habrían hecho aprobar una ley en los comicios centuriados por la que se reconocía la validez de los plebiscitos aprobados por el pueblo que contaran con la *autoritas* senatorial. La cuestión es muy debatida ya que significaría un anticipo de las posteriores *Lex Publilia Philonis* (339) y *Lex Hortensia* (287) en lo que al reconocimiento de los plebiscitos se refiere. BISCARDI (1987), 75 ss.

127 Serv., *ad Verg.*, *Georg.* 3.82. Quint., *inst. Orat.* 2.5.19. Hor., *Sat.*, 1.5.41. Plin., *ep.* 7.11.3. Pol. 10.4.8 ss. ERNOUT/MEILLET (1951), 36.

*tribunos legem promulgare ne cui album in vestimentum addere petitionis causa liceret*<sup>128</sup>. Los tribunos habían propuesto esta disposición tras la frustración que supuso el resultado de las últimas elecciones de tribunos consulares en la que todos los cargos habían ido a parar a manos patricias<sup>129</sup>. En este sentido, el plebiscito de *albo in vestimentum non addendo* no puede considerarse como legislación específica de *ambitus* –ni el propio Livio así lo considera– puesto que no denuncia ninguna práctica corrupta ni lo configura como un *crimen*<sup>130</sup>; simplemente pretendía evitar que unas togas excesivamente blanqueadas atrajeran sobre quienes las vestían una mayor atención por parte del populacho que pudiera redundar en beneficio de sus intereses electorales<sup>131</sup>. La doctrina se ha manifestado mayoritariamente a favor de que se trató de un mecanismo de defensa para controlar a quienes intentaban entrar en el mundo de la política (*novi homines*)<sup>132</sup>, la mayoría de ellos no pertenecientes al patriciado, pero me da la impresión de que en este momento concreto y contando con el fracaso electoral del año anterior, la pretensión de los tribunos era dirigir también la prohibición hacia el orden patricio y moderar los símbolos exteriores (la toga) en su propaganda electoral.

El final del siglo V a. C. conoció unos pocos episodios de posible fraude que fueron públicamente denunciados por los tribunos de la plebe, pero la falta de legislación impedía que prosperase una acusación concreta. En los comicios que eligieron a los tribunos consulares y los cuestores del año 420 ningún plebeyo consiguió salir elegido ante el estupor de los dirigentes de la plebe quienes acusaron a los patricios de la comisión de alguna artimaña por parte de Aulio Sempronio Atratinio que era quién presidía las elecciones de los cuestores: "*Fraudem profecto in re esse, et A. Sempronium comitiis plus artis adhibuisse quam fidei. Eius iniuria queri suos honore deiectos*"<sup>133</sup>. Hubiera o no fraude, lo cierto es que la plebe, excepción hecha del caso de sus tribunos y *aediles*, no siempre votaba a sus representantes para el resto de magistraturas, y eso sucedería durante toda la República. En primer lugar, precisamente en esta época, es necesario recordarlo, las relaciones clientelares ataban a muchos plebeyos hacia los patricios. La *clientela* como forma de relación social<sup>134</sup> existía prácticamente desde los albores de la *urbs romana*<sup>135</sup>. En

---

128 Liv. 4.25.9-14.

129 Liv. *ibidem*. STAVELEY (1953), 31.

130 FASCIONE (1981), 268. HUSBAND (1916a), 535.

131 LABOULAYE (1845), 284. Dejarse ver por la ciudad, atraer la mirada y atención del pueblo, y para eso nada mejor que hacerlo luciendo una vestimenta llamativa. Siglos después, Cicerón destacaría la importancia de que el electorado viese frecuentemente al político por encima de que oyesen de sus hazañas (*pro Planc.*, 66).

132 HUSBAND (1915), 376. HUSBAND (1916a), 536. FASCIONE (1981), 278. DUPLÁ (2003), 134. ARBIZU (2000), 38 y 39. SALERNO (1999), 57 y 58.

133 Liv. 4.44. Livio no llega a concretar el tipo de fraude que pudo realizarse.

134 Presente también en otras comunidades históricas: LINTOTT (1999), 178 y 179. Opina WOOD (1988), 183 y 184, que el uso de la clientela no constituye ninguna forma de corrupción; en sentido contrario BETTI (1982), 26: el origen de la corrupción política del *populus* hay que remontarlo al mismo momento de creación de las clientelas, pues sentaron la convicción de que los cargos públicos eran un regalo (y una obligación) de aquéllas hacia sus patronos.

135 Dion. Hal. 2.10. DE MARTINO (1988), 31. DE MARTINO (1972), t.1, 27 ss. MOMMSEN (1985), t.6.1, 59 ss. MAGDELAIN (1971), 103 ss. CAPOGROSSI COLOGNESI (2009), 154 y 155. Léase la larga y mordaz invectiva de Plauto hacia los



virtud de la misma, el cliente, que recibía protección y asistencia de su *patronus*, tenía una serie de obligaciones hacia éste que en el ámbito público se traducían en prestarles apoyo político (electoral), aunque curiosamente no haya un solo texto que establezca legalmente tal imposición. Y un segundo aspecto, y este tiene validez para toda la República, es que hay que tener en cuenta que los comicios no sólo elegían magistrados civiles sino militares<sup>136</sup>, esto es, los líderes del ejército de un Estado que prácticamente no conocería un año sin guerras en los siglos venideros, así que los patricios contaban con cierta ventaja por haber dirigido las milicias desde antiguo. Más adelante, en el año 408<sup>137</sup>, los patricios fueron acusados de urdir un inteligente ardid para hacerse con los puestos de tribunos militares: junto a sus candidatos, todos ellos hombres de prestigio, presentaron otra lista de hombres indignos con el propósito de que los verdaderos candidatos destacaran todavía más. El resultado fue el esperado, porque el electorado plebeyo extendió el rechazo hacia sus propios candidatos prefiriendo la *dignitas* de los patricios. Si hemos de creer a Livio, la táctica se habría fraguado a partir de las elecciones para la cuestura del año anterior (409 a.C.), en la que tres plebeyos obtuvieron dicha magistratura por tan sólo un patricio. El resultado de esos comicios irritó a los patricios, no sólo porque la cuestura era paso importante en la carrera política, sino porque pensaban que estaban perdiendo el poder político y que a los jóvenes patricios se les estaba impidiendo ejercer las dignidades que por Derecho les correspondía<sup>138</sup>. Artimañas y métodos, en definitiva, que todavía no constituían una forma de corrupción en sentido propio.

14. En 358 a.C. los romanos se dotaron de su primera ley, según Livio, contra el fraude y la corrupción electoral: la *Lex Poetelia de ambitu*<sup>139</sup>, aunque como vamos a comprobar en sentido técnico tampoco puede ser considerada una ley penal. La oportunidad de la normativa se entiende perfectamente en el contexto histórico de la aprobación muy pocos años antes de de las *Leges Liciniae Sextiae*. Las posibilidades de promoción personal que suponía para la élite plebeya la igualdad política fue motivo más que suficiente para que Cayo Petelio, tribuno de la plebe, presentase al pueblo para su aprobación, contando con la *auctoritas patrum*, la *rogatio* que regulaba la propaganda electoral<sup>140</sup> con el objeto de contener la ambición de los nuevos hombres en política, la mayoría sin antecedentes familiares destacables, que aspiraban a abrirse un hueco entre la *nobilitas*. Estos *novi homines* se dedicaban a darse a conocer entre el pueblo en los días de mercado, en los lugares de reunión cívicos (*conciliabula*) y en las afueras de Roma buscando el apoyo de

---

clientes (¡Qué manía más estúpida e incómoda es esa que tenemos y sobre todo tienen los poderosos de querer todos para sí el mayor número de clientes!...) que pone bien de manifiesto las desventajas de esta relación social en la vida cotidiana: *Menaechmi*, 575-600.

136 CERAMI (2007), 388. Cicerón lo pondría de manifiesto también para las elecciones de su época (*Mur.*, 38).

137 Liv. 4.56.

138 Liv. 4.54.

139 FASCIONE (1981), 269 ss. (bibl. en p. 270 n. 22).

140 DUPLÁ (2003), 134.



nuevas clientelas<sup>141</sup> o, tal vez de las dos nuevas tribus rústicas creadas ese mismo año, la Pontina y la Publilia, como recuerda Livio: "*Eodem anno duae tribus, Pomptina et Publilia, additae... et de ambitu ab C. Poetelio tribuno plebis auctoribus patribus tum primum ad populum latum est; eaque rogatione novorum maxime hominum ambitionem, qui nundinas et conciliabula obire soliti erant, compressam credebant*"<sup>142</sup>. La *rogatio* contaba con la autorización del Senado (*auctoritas patrum*), de forma que si hemos de hacer caso a Livio y a Plinio en lo concerniente al contenido de la *Lex Valeria Horatia de plebiscitis* del 449<sup>143</sup>, alcanzó eficacia general. Esta concepción del *ambitus* como un *rondar* de los candidatos por los lugares públicos será la que luego tomarían los gramáticos latinos para la explicación de los términos *ambire*, *ambitio* y *ambitus*<sup>144</sup>.

Poco más sabemos de esta disposición. No hay ninguna base para colegir que el plebiscito creara una forma delictiva, el *crimen ambitus*<sup>145</sup>, todavía. Creo, simplemente, que evidenciaba la preocupación real en la clase dirigente de que pudiera formarse una nueva élite política fuera de la *nobilitas* plebeya, y de ahí que intentaran reprimir una serie de conductas, merodear a los votantes en busca de apoyo, que de por sí no constituían prácticas que atentaran contra la transparencia de los comicios electorales. Preceptos, por tanto, dirigidos a regular la *ambitio* y no el *ambitus*<sup>146</sup>. Como se ha apuntado, paradójicamente la ley se dirigía contra los intereses de los propios plebeyos poniendo cortapisas a que pudiera formarse una nueva generación de políticos, lo que a mi juicio demuestra el grado de integración de los tribunos en el aspecto institucional y la comunión de intereses con la *nobilitas* de la que formaba parte<sup>147</sup>. La falta de mención a las posibles sanciones refuerza la idea de un carácter más preventivo que correctivo de una práctica antijurídica. Lo más probable es que llevara aparejada una simple imposición económica<sup>148</sup>. La historicidad del plebiscito no se ha puesto en duda<sup>149</sup>. Respetando el sentido cronológico que seguimos en esta exposición, es necesario hacer una mención a un fragmento del prólogo del *Anfitrión* de Plauto porque contiene una alusión a una ley de *ambitus*<sup>150</sup>. Por las fechas en que el comediógrafo pudo componer su *Amphitruo* (entre el 201 y el 188 a.C. según distintas opiniones)<sup>151</sup>, sólo podía estar refiriéndose a la *Lex Poetelia* ya que

141 DE SANCTIS (1907), t.2, 236. McDONNELL (1986), 565 y 566.

142 Liv. 7.15 *in fine*.

143 Cfr. en contra COLI U. (1957a), 534 n. 2. Sobre la ley en cuestión y sus distintas interpretaciones vid. *supra* n. 126.

144 *Supra* n. 118 y FASCIONE (1981), 271.

145 MOMMSEN (1955), 866.

146 McDONNELL (1986), 567 ss.

147 FASCIONE (1984), 25. HUSBAND (1915), 376. *Supra* n. 25.

148 MOMMSEN (1955), 866. FASCIONE (1984), 35 n. 46.

149 FASCIONE (1981), 273 ss. LINTOTT (1990), 4. HUSBAND (1915), 377.

150 COSTA (1890), 411 y 415. En otras tres obras de Plauto aparecen unas mínimas referencias a la *ambitio* electoral que no tienen, sin embargo, la misma dimensión del pasaje del *Anfitrión*. Para aquellos otros textos vid. RESINA (2011), 6 ss.

151 La fecha es incierta y objeto de discusión en la doctrina especializada: vid. síntesis en la edición de ROMÁN BRAVO (1998), t.1, 110 y 111.

faltaban todavía unos años para la aprobación de las siguientes disposiciones sobre el abuso electoral (las leyes *Cornelia Baebia de ambitu* y *Cornelia Fulvia de ambitu*, que entrarían en vigor, respectivamente, en 181 y 159 a.C., habiendo muerto además Plauto en el año 184 según información suministrada por Cicerón<sup>152</sup>). Dejando a un lado su innegable valor literario, con la armonización entre actores y políticos resultante de comparar los espectáculos en que ambos participan (las representaciones teatrales los primeros, las campañas electorales los segundos)<sup>153</sup>, el pasaje tiene una gran importancia en el aspecto jurídico: "*Pues bien, este es el ruego que me ordenó haceros Júpiter: que unos inspectores vayan de asiento en asiento por todas las gradas para vigilar a los espectadores y, si vieran a alguien dispuesto a hacer de alabardero*<sup>154</sup> a favor de algún actor, que se le coja la toga en prenda; y si alguien hubiera intrigado para conseguir la palma para los cómicos o para cualquier artista –bien por escrito o personalmente o por un intermediario–, o si los ediles se la dieran a alguien injustamente, Júpiter ordenó que se aplique la misma ley que si hubiesen intrigado para conseguir una magistratura para sí o para otro"<sup>155</sup>. La posibilidad de que en tiempo de Plauto estuviese otra ley de *ambitus* en vigor (posterior a la *Poetelia* y anterior a la *Cornelia Baebia*) que analistas y escritores hubiesen preterido es harto improbable teniendo en cuenta que los entresijos de la política son un tema central en las narraciones de la República, de manera que cuesta creer que hubiesen pasado por alto una disposición de tanta importancia<sup>156</sup>. Pero por otro lado, no cabe pensar en la *Lex Poetelia* a tenor del lenguaje empleado y las conductas descritas; Plauto habla de verdadero *ambitus*: intrigas para conseguir para sí o para otros las magistraturas, y el plebiscito petelio no sancionaba prácticas de esa naturaleza. En definitiva, el comediógrafo menciona una auténtica *lex de ambitu* y la *Lex Poetelia* no lo era. No queda otra sino pensar<sup>157</sup> que el *prologus* del *Amphitruo* se halle interpolado, retocado por una mano posterior, algo que no era excepcional en el texto de sus obras pues se buscaba adaptarlas al momento en que eran representadas. De esta forma se entiende la mención a una *lex* que ya sí había introducido un nuevo tipo delictivo como era el *ambitus*, siendo lo más probable que las líneas comentadas hubiesen sido escritas tras la promulgación de la *Lex Cornelia* del 159<sup>158</sup>.

---

152 *Brut.*, 15.60.

153 Paralelismo que con agudeza desarrolla RESINA (2011), 9 ss.

154 Expresión utilizada por ROMÁN BRAVO (1998), t.1, 117 n.6, y que el mismo editor explica en estos términos: "*Hemos recurrido al término castizo de "alabardero" para designar a las personas que asisten al teatro para aplaudir a cambio de entrada gratuita u otra recompensa. Es la claqué de los teatros modernos*".

155 Plaut., *Amph.*, 65-74: "*sive qui ambissint palmam histrionibus sive cuiquam artifici, si per scriptas litteras sive qui ipse ambissit seu per internuntium, sive adeo aediles perfidiose cui duint, sirempse legem iussit esse luppiter, quasi magistratum sibi alterive ambiverit*".

156 McDONNELL (1986), 571. GENTILE (1879), 230 ss. CHENOLL ALFARO (1984), 91 y 92.

157 Tal es la conclusión a la que llega McDONNELL (1986), 576. Otras voces en el mismo sentido son recordadas por RESINA (2011), 16 n. 33.

158 MATTINGLY (1960), 239 y 240.

15. En el tiempo que medió entre la *Lex Poetelia de ambitu* (358 a.C.) y la siguiente *Lex Cornelia Baebia de ambitu* (181 a.C.)<sup>159</sup>, Roma experimentó una enorme transformación: se había convertido en un Imperio. El final de la Segunda Guerra Púnica acontecido veinte años antes (202) había conferido a Roma el control absoluto del Mediterráneo. Para la República supuso la apropiación de enormes riquezas y la entrada masiva de esclavos con el consiguiente cambio en su sistema económico (se pasa a un modo de producción esclavista)<sup>160</sup> y social (se advierte un cambio en las costumbres tradicionales y un interés desmedido por el lujo)<sup>161</sup>. Sin embargo, la constitución política se mantuvo intacta y comenzó a presentar sus carencias. El interés (*ambitio*) en la carrera política y, especialmente, en la magistratura suprema y en las provinciales, se hizo cada vez más intenso<sup>162</sup> y la oligarquía romana empezó a desarrollar las prácticas abusivas que conducirían al período conocido como crisis de la República<sup>163</sup>. Con toda la intención, Plauto ponía en boca de uno de sus personajes lo que todo el mundo sabía: que *la corrupción estaba santificada por la costumbre (ambitio iam more sancta est)*<sup>164</sup>. Era absolutamente necesario dotar a la República de una ley contra el *ambitus* y regular con mayor precisión y rigor otros aspectos también fundamentales de la vida política.

En el plazo de dos años vieron la luz tres proyectos decisivos. En primer lugar, la ya mentada *Lex Cornelia Baebia de ambitu* (181 a.C.) propuesta por los cónsules P. Cornelio y M. Bepio: *et leges de ambitu consules ex auctoritate senatus ad populum tulerunt*<sup>165</sup>. La ley establecía por primera vez una pena de tipo personal y no puramente económica, lo que indica que se trata de la primera norma que contemplaba la corrupción electoral como un delito<sup>166</sup> y que esta debía ser ya lo suficientemente frecuente y grave en la praxis como para imponer una pena más rigurosa. El hecho de que se trate de una ley consular en un momento histórico con las características económicas anteriormente señaladas revela que existía gran preocupación en el seno de la *nobilitas* por el fulgurante ascenso de no pocos nuevos ricos, miembros de la clase ecuestre notablemente enriquecidos por el comercio con las nuevas provincias y sus negocios en Roma<sup>167</sup>. Las fuentes no se muestran concordes con la sanción que establecía la ley: de un lado, algún texto apunta a la inhabilitación por

159 Sobre ese intervalo LINTOTT (1990), 4 y 5.

160 Al respecto WOOD (1980), 20 ss. CASTÁN (2007), 895.

161 Vid. GELZER (1975), 136 ss. ALFÖLDY (1996), 38 ss.

162 LINTOTT (1999), 145.

163 No puede dejar de leerse la certera recapitulación (cap. 47, *Anacephaleosis*) de todos esos años ofrecida por Floro en su *Epítome* (1.47.1-14).

164 Plaut., *Trin.*, 1033.

165 Liv. 11.19.

166 Como la primera disposición sobre corrupción electoral en la experiencia jurídica romana vid. COLI (1957a), 534. TORRENT (2005b), 598. GRUEN (1968), 46. Contrario a esta tesis se pronuncia MURGA (1992), 115, quien cree que la tipificación del *ambitus* es de fecha posterior. Cf. MOMMSEN (1985), t.3, 227 n. 3, quien sugiere que esta *Lex Cornelia Baebia de ambitu* sea la misma ley, o sus disposiciones estuviesen contenidas en la *Lex Baebia de praetoribus* que se dictó el mismo año 181 (Liv. 40.44.2).

167 Especialmente beneficiados a raíz de la *Lex Claudia* del 218 a. C. que limitaba las operaciones y actividades comerciales y financieras de los senadores. Liv. 21.63.8. NICOLET (1977), 746 ss. ARBIZU (2000), 8, 27 y 28. CAPOGROSSI COLOGNESI (2009), 159 y 160. CASSOLA (1962), 83.

diez años para el ejercicio del sufragio pasivo (*ius honorum*)<sup>168</sup>, pero de otro, las *Historiae* de Polibio –escritas a mediados del s. II– afirman que se trataba de la pena capital. Dada la imprecisa datación de la obra, Polibio bien podía estar refiriéndose esta ley como a la posterior *Cornelia Fulvia* del 159<sup>169</sup>. En otro orden de cosas, ese mismo año 181 vio la luz una ley que, sin ser específicamente de *ambitu*, restringía una serie de actos muy comunes en la sociedad romana que era utilizados (no en todos los casos, pero sí en gran medida) para obtener popularidad y, por tanto, votos: la *Lex Orchia de coenis*, que introducía limitaciones en el número de invitados en los banquetes y cenas celebrados por los nobles<sup>170</sup>. Medidas que daban entrada a la llamada legislación suntuaria dirigida a limitar las demostraciones excesivas de lujo en *nobiles* y *homines novi*, los cuales hacían gala de su riqueza y clase social con fines claramente propagandísticos<sup>171</sup>. La *Lex Orchia* tendría continuidad en la *Lex Fannia cibaria* del 161 que establecía una cantidad máxima para los gastos de estos festines, y más adelante por la *Didia sunptuaria*, del 143, que hizo extensibles las disposiciones de la ley *Fannia* y sus sanciones a toda Italia y multaba, además, a los propios invitados<sup>172</sup>. Finalmente, del 180 a.C. data la *Lex Villia annalis*<sup>173</sup> que blindaba ciertos aspectos relevantes del *cursus honorum*, sobre todo el concerniente a la edad mínima de desempeñar los distintos oficios públicos (*quot annos nati quemque magistratum peterent caperentque*), puesto que la praxis y algunas disposiciones anteriores de las que poco se sabe ya habían establecido un *certus ordo magistratus* e impuesto determinadas limitaciones al mismo<sup>174</sup>.

168 Liv. 40.19.11. Schol. Bob. 361. ROTONDI (1990), 277. CHENOLL ALFARO (1984), 91.

169 Pol. 6.56.4: "En Cartago se ocupan las magistraturas mediante el pago de obsequios y sin que ello se oculte, mientras que en Roma la pena de muerte castiga tal proceder". Puesto que Polibio inició la composición de sus *Historias* antes del a. 150, podría referirse a cualquiera de las dos *leges de ambitu* que se habían dado en 181y en 159 a.C. COLI (1957a), 537. RIBAS ALBA (2009), 298. Recuérdese, no obstante, que era una praxis consuetudinaria que se mantuvo durante la República conmutar la pena capital por el exilio voluntario del reo con la prohibición de retornar a territorio romano bajo pena de muerte (*aqua et igni interdictio*). Vid. SANTALUCIA (1994), 239. CRIFÓ (1960), 52 ss. CLAASSEN (1996), 571 ss.

170 Gell. 2.14.1–14. *Macrob., Sat.* 3.17.3. ROTONDI (1990), 276.

171 BRETONE (1991), 14–16.

172 Gell. 2.24. *Macrob. Sat.* 3.17.5; 2.13. *Plin. Nat. Hist.*, 10.71.139; 10.50.139. ROTONDI (1990), 287 y 295.

173 Liv. 40.44.1.

174 La práctica consuetudinaria fijó un orden jerárquico para ocupar las magistraturas (*certus ordo magistratus*) que fue completado con otras disposiciones especiales: así, v. gr., un plebiscito del 342 a. C prohibió la reelección a la misma magistratura sin haber dejado transcurrir un intervalo de 10 años, como también se denegó la reelección para la censura en el 265 y para el consulado en el 151 a.C, etc. La *Lex Villia annalis* determinaba la edad mínima exigida para el desempeño de cada una de ellas y ordenaba un intervalo de dos años entre una y otra. La carrera se iniciaba para los patricios en la cuestura, tras haber prestado servicio en el ejército durante diez años, a la que seguía la edilidad, la pretura y por último el consulado. La censura y excepcionalmente la dictadura culminaban la carrera política. El tribuno de la plebe, sólo accesible a los plebeyos y patricios transferidos *ad plebem*, se desempeñaba después de la cuestura y antes de la edilidad plebeya. Según esta ley la edad mínima para empezar el *cursus honorum* eran los veintisiete años que daban derecho a uno de los puestos de cuestor; para el consulado, treinta y uno. La posterior *Lex Cornelia de magistratibus* del dictador Sila aumentó las edades de todas las magistraturas y señaló la de cuarenta y tres años para alcanzar el consulado. Vid. MOMMSEN (1985), t.2, 170 ss. WISEMAN (1971), 153 ss.

16. En el año 159 a.C. los cónsules Cornelio y Fulvio hicieron votar una nueva ley contra la corrupción que conocemos a través de una sola mención de Livio: *lex de ambitu data*, que ha pasado a ser denominada *Lex Cornelia Fulvia*<sup>175</sup>. La falta de otras noticias ha hecho dudar de su historicidad<sup>176</sup> y cuenta con el mismo problema que la anterior *Cornelia Baebia de ambitu* en torno a la sanción impuesta (inhabilitación por diez años o pena de muerte), ya que aparte de Livio, que nada dice acerca de esto, la otra mención que podría aludir a esta ley es la de Polibio (6.56.4) de la que hablábamos en el apartado anterior (pena de muerte). En todo caso esta, esta es una época crucial en la historia de la República. Desde mediados del siglo II en adelante la sucesión de acontecimientos que intentaron poner fin a la hegemonía de la oligarquía y dotar al sistema de un carácter más democrático es continua. En relación con la clase política, cabe hacer mención a dos leyes: la *Lex Calpurnia de repetundis* (149 a. C.), concerniente al *crimen repetundarum* (delito de concusión, extorsión y expolio de los magistrados romanos sobre las provincias), creaba por vez primera un tribunal penal regular y permanente para el conocimiento de este delito (*quaestio perpetua*)<sup>177</sup> que sería utilizado como modelo para el resto de *quaestiones* que irían instituyéndose mediante leyes específicas, como fue el caso de la *quaestio de ambitu* de la que vamos a ocuparnos enseguida. Y en el ámbito electoral debe ser destacada la *Lex Gabinia Tabellaria* del 139 a.C., ya que introdujo en el sistema de votaciones el voto (*suffragium*) por escrito y, por tanto, secreto<sup>178</sup>. Esta disposición, a la que más adelante volveremos, hasta cierto punto mitigó las presiones que sufrían los electores al tener que pronunciar su voto en los comicios electorales de forma oral, ya que muchas veces no lo hacían en libertad por el control de sus patrones.

La actividad legislativa en torno a la corrupción electoral cesó en las siguientes décadas, pero no así la suntuaria que estamos también recordando por la conexión tan estrecha que tiene con nuestro objeto de estudio. De esta época es la *Lex Licinia sumptuaria*,

---

175 Liv. *Perioch.*, 47.2.

176 Cf. ROTONDI (1990), 288. SCULLARD (1973), 23 y 204. NADIG (1997), 28 ss. Con originalidad, aunque con pocas probabilidades de verosimilitud, propone FASCIONE (1984), 46, la tesis de que esta *lex* postulaba la creación de una *quaestio perpetua de ambitu* tiempo antes, por consiguiente, del primer establecimiento de un tribunal de esas características en Roma: el de *repetundis* del 149. DE SANCTIS (1923), 496, puso en relación la ley con el momento histórico en la que fue dictada, una época de apogeo de la oligarquía, y encontró la razón de ser en el intento de los oligarcas romanos de controlar la conductas propagandísticas ilícitas fuera de Roma, fundamentalmente en Italia, y frenar las iniciativas políticas que pudieran erigirse al amparo de nuevas clientelas italianas. No deja de ser una idea interesante, porque el control de las clientelas italianas era menos estricto que el de las romanas, pero tampoco sería desdeñable pensar que habían comenzado a proliferar los episodios de corrupción en los comicios, como pone de manifiesto un texto no muy preciso de Julio Obsequens relativo a las elecciones del 166: Iul. Obs., *Lib. prodig.*, 12: *Comitia cum ambitiosissime fierent et ob hoc senatus in Capitolio haberetur...*

177 SANTALUCIA (1998), 97 ss. TORRENT (2005a), 31 ss. TORRENT (2005b), 1023-1026.

178 La *Lex Gabinia* marca el inicio de una legislación que pretendía evitar fraudes y manipulaciones en los comicios y que continuó con la *Lex Cassia Tabellaria* (voto secreto de los jurados en los comicios judiciales, a. 137), la *Lex Papiria Tabellaria* (voto secreto en los comicios legislativos, a. 131), la *Lex Caelia Tabellaria* (voto secreto de los jurados en los juicios de *perduellio*, a. 107). Vid. Cic., *de leg.*, 3.16. SALERNO (1999), 123 ss. MOMMSEN (1985), t. 6.1, 329 ss., 457 ss. y 464 ss. COSTA E. (2007), 314 y 315. LINTOTT (1999), 47 ss.

entre el 141 y el 131 a. C.<sup>179</sup>, que recortaba los gastos de cenas y banquetes (incluidos los nupciales) y el consumo de carne y pescado en días especiales, y la *Lex Aemilia sumptuaria (cibaria)* del 115 que en un sentido parecido limitaba la clase y cantidad de alimentos a servir en los convites<sup>180</sup>. Paradójicamente al momento político que vivía la República (las políticas populares de los hermanos Graco, la fractura de la *nobilitas* en las dos facciones de *optimates* y *populares*, el ascenso de Mario, la pronta irrupción de Sila y Pompeyo o la definitiva formación de un *ordo equester* como clase política), si exceptuamos el proceso al que al hubo de enfrentarse Mario tras su elección como pretor<sup>181</sup>, las fuentes no documentan más que otros dos casos de *ambitus*<sup>182</sup> y lo hacen tan sucintamente que es difícil hacer un juicio de valor. Probablemente en esos años no hubo sobornos evidentes que propiciaran una *accusatio*.

17. En el s. I a. C. las *quaestiones perpetuae* se habían convertido en los órganos jurisdiccionales principales en el ámbito penal<sup>183</sup>. La justicia popular impartida durante siglos por los comicios populares a través del ejercicio de la *provocatio ad populum* había mostrado hacia ya mucho tiempo una serie de desventajas y contrariedades que ponían en peligro la seguridad pública<sup>184</sup>. Los supuestos de corrupción electoral se habían ventilado con anterioridad a través de los *iudicia populi*<sup>185</sup>. Partiendo del tribunal permanente que juzgaba los casos de extorsión de los magistrados provinciales al que nos hemos referido hace bien poco, fueron creadas sucesivas *quaestiones* para el enjuiciamiento de los delitos más importantes, cuya instrucción y conocimiento se entregó inicialmente al Senado y con una nota importante: las sentencias estaban excluidas de *provocatio*. Sin embargo, y en el marco de reformas populares emprendidas por los hermanos Graco contra la facción más conservadora del Senado (*optimates*), la composición de las *quaestiones* fue puesta en manos de los *equites*<sup>186</sup> por medio de la *Lex Sempronia de repetundis (iudiciaria)* del 123. Sin duda era un arma poderosa<sup>187</sup> en poder de un estamento político-social que veía limitadas sus aspiraciones políticas por el férreo control de la nobleza senatorial, pero de la que no hicieron gran uso para promover procesos por *ambitus*, quizás porque había tanta corrupción en el seno de los *equites* como en el de la *nobilitas* y por la falta de unidad del propio estamento<sup>188</sup>. Sila sí percibió ese importante poder y en el año 81 en el conjunto de sus reformas constitucionales conservadoras volvió a transferir al Senado

---

179 GABBA (1981), 552.

180 TORRENT (2005b), 591.

181 Plut. *Mar.*, 5. También recoge este mismo caso Valerio Máximo (6.9.14): *ambitus enim accusatus uix atque aegre absolutionem ab iudicibus impetrauit*.

182 Cic. *de orat.*, 2.68.274. Plin. *Nat. His.*, 35.162. Vid. LINTOTT (1990), 6 y 7.

183 SANTALUCIA (1998), 153 ss. GIUFFRÈ (1998), 40 ss.

184 LINTOTT (1968), 6 ss.

185 Vid MURGA (1992), 116 n. 12.

186 Tac., *Ann.* 12.60.3; Vell. Pat. 2.6.3. TAYLOR (1984), 17 ss.

187 SYME (1939), 13. ALFÖLDY (1996), 62. Flor., *Ep.*, 1.47.9.

188 GRUEN (1968), 124.

la prerrogativa de componer los jurados en estos procesos<sup>189</sup>. El establecimiento de un tribunal permanente para juzgar los casos de *ambitus* se da ya como cierto en el año 81 por medio de la *Lex Cornelia de ambitu*<sup>190</sup> del propio Sila, pero con toda seguridad existía un tribunal especial para este delito a finales del s. II a. C.; si este tribunal era permanente o eventual (extraordinario) es lo que más se discute entre los especialistas<sup>191</sup>, aunque parece más probable que tuviese carácter extraordinario. La ley silana contra el *ambitus*<sup>192</sup> impuso como pena la pérdida del *ius honorum* (prohibición de competir por las magistraturas) durante un período de diez años: "*Superioribus <temporibus> damnati lege Cornelia hoc genus poenae ferebant, ut magistratum petitione per decem annos abstinerent*"<sup>193</sup>. Hay, por último, noticias<sup>194</sup> acerca de una *Lex Cornelia sumptuaria* del mismo personaje, de fecha incierta, que como otras leyes suntuarias republicanas intentó reducir los habituales dispendios en que la *nobilitas* incurría desde tiempo atrás en la celebración de banquetes, funerales, juegos, etc., y que constituían uno de los modos más frecuentes de ganar popularidad entre las clases medias y bajas.

18. Los años sesenta del siglo I a. C. conocieron la más frenética tarea de intentar poner coto a las prácticas fraudulentas que empañaban el sistema electoral romano, pues hasta cuatro leyes fueron promulgadas y se presentaron dos propuestas más (*rogationes*)<sup>195</sup>. De fecha insegura, pero entre el 71 y el 68 a. C. data la última ley suntuaria de la República, propuesta por el tribuno C. Ancio (*Lex Antia sumptuaria*), que prohibía a magistrados y candidatos cenar fuera de casa para burlar las restricciones sobre banquetes, sirviéndose de otros anfitriones y de sus casas para continuar con la propaganda política<sup>196</sup>. Ya en el año 67 se promulgó una nueva ley específica de *ambitus* que vino precedida por una *rogatio* singular que merece suma atención, puesto que de haberse aprobado se habría convertido en la normativa más rigurosa y completa contra la corrupción de la historia constitucional

189 Por poco tiempo: la *Lex Aurelia iudiciaria* del 70 devolvería parcialmente esta potestad al Senado que lo compartiría con los *equites* y los *tribuni aerarii*.

190 FERRARY (2001), 162 ss. TORRENT (2005b), 599. HUSBAND (1916a), 539. GREENIDGE (1901), 423 n. 4.

191 Las reformas de Sila podrían haber reorganizado las *quaestiones* existentes: LINTOTT (1999), 157 ss. y 160. Por su parte, GRUEN (1974), 212, situaría una *quaestio perpetua* en torno al 120 a.C. (= GRUEN (1968), 124, 260 y 261). MACKAY (2011), 265. Alrededor del 116, NICOLET (1988), 298. FERRARY (2001), 163. GREENIDGE (1901), 421 y 422. En torno al año 114, MOMMSEN (1955), 867 y ARBIZU (2000), 204. El apoyo literario fundamental es Plut. *Mar.*, 5 y Cic., *Brut.*, 106. Finalmente, FASCIONE (1984), 46, 47, 58, 82 y 102, aboga por la existencia de un tribunal permanente de *ambitus* en Roma desde el 159 a través de la *Lex Cornelia Baebia de ambitu*. Complementariamente SANTALUCIA (1998), 127 y 144. GIUFFRÉ (1998), 60. MACKAY (2011), 228 y 265.

192 MOMMSEN T. (1985), t.2, 124 n. 3.

193 Schol. Bob. *pro Sulla*, 17, Stangl. p. 78. MOMMSEN (1955), 867 n. 2. ROTONDI (1990), 351.

194 Plut., *Sull.*, 35. Gell. 2.24.11. Macr., *Sat.*, 3.17.11. ARBIZU (2000), 13.

195 No puede admitirse, sin embargo, la existencia de una *Lex Aurelia de ambitu* del 70 a.C. que, a menudo, es traída a colación por una mención de Cicerón (*ad Q. fr.*, 1.3.8) y un pasaje de la vida de Catón de Útica (Plut., *Cat. Min.*, 8.2). La *Lex Aurelia* a la que se refiere el arpinate tiene que ser la *iudiciaria* del 70; y en el caso del griego, las leyes que mejor se adaptarían al presunto *ambitus* cometido por Catón serían la *Calpurnia de ambitu* o la *Fabia de numero sectorum*, ambas del 67. ROTONDI (1990), 369 y 370 y FASCIONE (1984), 50 y 51.

196 Gell. 2.24.3. Cic. *Fam.*, 7.26.2. LINTOTT (1990), 6.



romana. En un año turbulento en el plano político como pocos<sup>197</sup>, el tribuno de la plebe C. Cornelio intentó sacar adelante una ley que endurecía notablemente las penas para el magistrado corrupto y, por primera vez, de ahí la importancia de la propuesta, también para los intermediarios en la compra de votos y distribuidores del dinero del soborno entre los corruptos (las tribus y centurias, por lo general): los llamados *divisores*<sup>198</sup>. Casi con seguridad la *rogatio* prescribía el exilio para el candidato y quizá también para los *divisores*<sup>199</sup>, aunque esto último no puede asegurarse con certeza. Según Dión Casio<sup>200</sup>, el Senado pensó que la dureza de la *rogatio Cornelia* asustaría a cualquier posible acusador –lo más probable es que, simplemente, le disgustara un proyecto tan duro y de corte popular<sup>201</sup>– y suavizó el proyecto ese mismo año a través de una ley consular, la *Lex Calpurnia de ambitu* (Acilio Glabrión y Calpurnio Pisón). Pero lo verdaderamente asombroso es que el proyecto de Cornelio hubiese recibido el mismo rechazo por parte de la clase política como por el pueblo; ni unos ni otros, según el relato literario de Casio y Asconio, querían endurecer la legislación sobre una práctica tan habitual. Pese a todo, la nueva ley era severa comparada con anteriores disposiciones: pérdida del *ius honorum* y expulsión del Senado con carácter perpetuo así como la imposición de una sanción económica cuya cuantía no es conocida<sup>202</sup>. En cuanto a la posible sanción hacia los *divisores*, nada hay seguro pero no es en absoluto descartable que la ley finalmente la contemplara<sup>203</sup> aunque atenuada con respecto a la *rogatio Cornelia*. Dos textos de Cicerón y Asconio, como ha señalado Ferrary<sup>204</sup>, permiten pensarlo, y el momento era el oportuno pues el proceso contra Verres apenas tres años antes (70 a. C.) había destapado las actividades ilegales de estos cooperadores casi necesarios. En cualquier caso, la vigencia de la *Lex Calpurnia de ambitu* sería efímera: los gravísimos acontecimientos acontecidos los años en que Cicerón compitió por el consulado y lo desempeñó (64/63 a.C.), caracterizados negativamente por la fallida conspiración golpista de L. Catilina, un siniestro noble que pretendió ganar por las armas aquello que con los votos no había sido capaz de hacerlo, motivaron nuevas disposiciones.

197 Vid. Dion Cass. 36. 12 y ss.

198 Según Cicerón había *divisores* en todas las tribus: *divisores omnium tribuum noctu ad istum vocatos* (Verr., 1.8.22). Eran hombres importantes dentro de sus unidades (Apian., *Bell. civ.*, 3.23) y alguno, incluso, pertenecía al orden ecuestre. Vid. NICOLET (1966), pp. 137 y 603-4. DENIAUX (1987), 290.

199 HEITLAND (1909), 53.

200 Dion Cass. 36.38.4. Una narración algo diferente del episodio la encontramos en Asc., *in Cornel.* (Clark p. 75): *Cornelius tribunus plebis erat, cum legem de ambitu ex S. C. graviolem quam fuerat antea ferret et propter multitudinem divisorum qui per vim adversabantur e foro eiectus esset*. COLI (1957a), 535. GRIFFIN (1973), 196 ss. ARBIZU (2000), 204.

201 HEITLAND (1909), 50 ss. Vid. la reconstrucción de los hechos a partir de los textos de D. Casio y Asconio propuesta por McDONALD (1929), 202 ss.

202 Dion Cass. 36.38.1-3. Cic., *Mur.*, 46.

203 No lo creen así MOMMSEN (1955), 870 ni COLI U. (1957a), 535.

204 Cic., *Mur.*, 47. Asc., *in Cornel.* (Clark p. 74): *Quare cum hunc populus Romanus videret et cum a tribunis plebis doceretur nisi poena accessisset in divisores, exstingui ambitum nullo modo posse, legem hanc Corneli flagitabat...* FERRARY (2001), 166 y 167. En el mismo sentido HEITLAND (1909), 53. ARBIZU (2000), 214.



Del 64, probablemente<sup>205</sup>, es la *Lex Fabia de numero sectatorum*, cuyo fin era restringir el número de acólitos (*sectatores*) que tradicionalmente acompañaban al candidato en sus tareas promocionales y que en la praxis debía tener la apariencia de una imponente escolta del *petitor*. Todo lo que sabemos de la ley nos ha llegado principalmente a través de la *pro Lucio Murena oratio* ciceroniana: aunque no existía sanción penal<sup>206</sup> ni para el candidato ni para los acompañantes, quedaba prohibido que estos últimos fueran gratificados –asalariados– por el aspirante para así contar con un séquito numeroso que diera la apariencia de una mayor importancia y popularidad<sup>207</sup>. Propiamente no era una ley de *ambitus*, pero formaba parte de esas medidas complementarias para contener ciertas conductas y costumbres no delictivas pero influyentes en el ánimo del votante. Durante ese mismo año 64 y como consecuencia de la crisis provocada por la ambición de Lucio Catilina, Asconio menciona una *rogatio de ambitu* de la que nada sabemos salvo que no prosperó<sup>208</sup>. Obra de Cicerón es la *Lex Tullia de ambitu*<sup>209</sup> en el año de su consulado (63) que contenía novedades importantes con respecto a anteriores *leges de ambitu*: para el magistrado condenado, la pena de exilio<sup>210</sup> por diez años y la pérdida perpetua del *ius honorum*<sup>211</sup>; se mantenían las restricciones impuestas a los *sectatores* y mantenía la persecución contra los *divisores*<sup>212</sup>; introducía penas contra jueces o testigos que adujeran una enfermedad como excusa para no tomar parte en la *quaestio*<sup>213</sup>; y prohibió, por último, condecorar de que la lucha por las magistraturas comenzaba mucho antes de la *professio* oficial, la celebración de juegos de gladiadores y banquetes sociales durante los dos años anteriores a la presentación de la candidatura, salvo que estos vinieran impuestos por una obligación testamentaria<sup>214</sup>. Este tumultuoso decenio concluiría con la *rogatio Aufidia de ambitu* del año 61. El tribuno M. Aufidio Lurco propuso la exención de responsabilidad penal para el candidato que habiendo prometido dinero a las tribus por los votos no lo entregara tras la votación; por el contrario, si pagaba después de los comicios cumpliendo la promesa, la ley le condenaba de por vida a entregar una cantidad anual a cada tribu de

---

205 NADIG (1997), 45 ss. FERRARY (2001), 169 ss.

206 Cic., *Mur.*, 71.

207 Cic., *Mur.*, 70 y 73.

208 Asc. 83.

209 Cic. *Mur.* 46, 47, 67 y 89; Cic., *Planc.* 83; Dion Cass., 37.29. NADIG (1997), 48 ss. GALLO (2000), 34 ss. ARBIZU (2000), 212 y 213.

210 Por primera vez como pena autónoma (sanción penal) y no como conmutación de la pena de muerte. TORRENT A. (2005b), 116. Sobre la evolución de la pena del exilio: CRIFÒ (1960), 6-22, 35 ss. y 52 ss.

211 Cic., *Mur.*, 41; *Planc.*, 34. Dion Cass. 37.29.1.

212 Cic., *Mur.*, 47, 72 y 73. FERRARY (2001), 173 n. 47.

213 Cic., *Mur.*, 47.

214 Cic., *Sest.*, 64.133; *Vat.*, 15.37; *Mur.*, 67 y 73. MURGA (1992), 113 y 114, ha recordado cómo prohibiciones similares fueron llevadas a las leyes municipales: en concreto, en el c. 132 de la *Lex coloniae Genetivae Iuliae* (*Lex ursonensis*, a. 44 a.C.) se prohibieron a los candidatos de las magistraturas provinciales la celebración de banquetes o entrega de liberalidades tanto durante el año de la *petitio* como en el año anterior.

3.000 sestercios. La medida estaba enfocada a terminar con la actividad de los *divisores*, pero Cicerón recuerda que el proyecto no salió adelante<sup>215</sup>.

19. La década de los cincuenta conocería otras dos leyes consulares que intentaban frenar la corrupción electoral en sus distintas variedades. Fueron aprobadas a propuesta de dos de los hombres fuertes de Roma, Craso y Pompeyo, quienes para reprimir lo que era ya un mal endémico en la sociedad romana tuvieron que endurecer todavía más las penas impuestas en la década anterior. La primera de ellas, de Craso en 55 a.C., es llamada unas veces *Lex Licinia de ambitu* y otras, más propiamente, *Lex Licinia de sodaliciis*<sup>216</sup>, puesto que su objeto era la persecución del *crimen sodalitorium* que daba lugar cuando un *collegium* o *sodalitas* (asociaciones o grupos de personas, en todo caso)<sup>217</sup> promovía acciones violentas y coactivas sobre los electores para favorecer a un determinado candidato. Obviamente el candidato era inductor de tales acciones. Sin ser propiamente una forma de *ambitus*<sup>218</sup>, estaba íntimamente relacionado<sup>219</sup> con éste y también con el *crimen vis* que sancionaba conductas similares desde la *Lex Plautia de vi* (probablemente del 78 a.C.) y un senado consulto del 56 *ut sodalitates decuriatque discederent lesque de iis ferretur, ut, qui non discessissent, ea poena, quae est de vi, tenerentur*<sup>220</sup>, pero *crimen sodalitorium* y *crimen ambitus* eran formas delictivas independientes<sup>221</sup>. La *Lex Licinia*<sup>222</sup> imponía sanciones más duras que la *Lex Tullia de ambitu*, a la sazón legislación vigente en torno al *ambitus*, pues decretaba la *aquae et igni interdictio* (destierro perpetuo)<sup>223</sup>, probablemente como consecuencia del nefasto comportamiento de las *sodalitates* en el ámbito público desde que Clodio volviera a legalizarlas en el año de su tribunado (58 a.C.). En el año 52 a.C.,

215 En una carta fechada a mediados del 61 a. C. (*ad Att.*, 1,16.13): *Lurco autem tribunus pl., qui magistratum insimul cum lege alia iniit, solutus est et Aelia et Fufia, ut legem de ambitu ferret, quam ille bono auspicio claudus homo promulgavit. Ita comitia in a. d. VI Kal. Sext. dilata sunt. Novi est in lege hoc, ut, qui nummos in tribu pronuntiarit, si non dederit, impune sit, sin dederit ut, quoad vivat, singulis tribulibus (o tribubus) HS MMM debeat.* COSTA(1927), 95 n. 5. ROTONDI (1990), 384 y 385. GRUEN (1974), 224. FERRARY (2001), 179 ss.

216 La fusión se produce especialmente porque Cicerón en su defensa de Cn. Plancio (acusado por *ambitus* y *crimen sodalitorium*) habla de *leges* de forma genérica, pero no hay otra noticia de que fuesen dos leyes distintas: Cic., *Planc.* 18.44. ROTONDI (1990), 407. Cf. FASCIONE (1981), 257 n. 5, quien piensa que fueron dos leyes independientes.

217 Las fuentes llaman indistintamente *collegia* o *sodalitates* a las asociaciones de toda clase de artesanos o fieles de ciertas divinidades. Muchas de ellas remontaban sus orígenes a la época monárquica y contaban con fines nobles (asistenciales, religiosos, festivos...). La Ley de las XII Tablas les imponía respetar el orden público y las leyes: D.47.22.4 (*Gai. 4 ad leg. XII Tab.*), pero en la última época de la República tomaron partido por determinados candidatos ejerciendo una clara presión sobre los ciudadanos que determinó que fueran prohibidas en 64 a. C a través de un senadoconsulto. En 58, Publio Clodio volvió a legalizarlas mediante ley y permitió la creación de nuevas, teniendo la vocación de utilizarlas en todo tipo de contiendas sociales. De esta forma, Clodio controlaba a la plebe urbana provocando actos de violencia callejera por toda la ciudad. Vid. LINTOTT (1968), 77 ss. HUSBAND (1916b), 11 ss. TORRENT (2005b), 180 y 1223-4. MOMMSEN (1955), 871. DE ROBERTIS (1981), 33.

218 Milón, v. gr., fue perseguido en el año 52 por *sodalitium* y *ambitus* en procesos diferentes. Cic., *Planc.*, 20. ARBIZU (2000), 283 ss.

219 HUSBAND (1916c), 20 y 21.

220 Cic. *Q. fr.*, 2.3.5. COLI (1957a), 535. LINTOTT (1968), 123. DE ROBERTIS (1981), 45 y 46.

221 Cic., *Planc.*, 15.36 ss.; 18.45. COSTA (1927), 94.

222 FASCIONE (1984), 76 ss. MOURITSEN (2001), 149 ss.

223 MOMMSEN (1955), 874. Dion Cass. 39.37.

coincidiendo con un episodio singular de alteración de la constitución política republicana, el consulado *único* de Pompeyo (*sine collega*), este singularísimo militar y político de la República tardía promulgó la que sería la última ley de este periodo<sup>224</sup> relativa al fraude electoral: la *Lex Pompeia de ambitu*, que derogaba la dada por Cicerón e introducía cambios sustanciales procedimentales<sup>225</sup>. En cuanto a las penas, convertía el anterior *exilium* decenal en perpetuo con todas las consecuencias que esta grave sanción comportaba: a nuestros efectos, la confiscación del patrimonio y, desde luego, la pérdida de su condición de magistrado<sup>226</sup>.

20. La copiosa legislación emitida en los años centrales del s. I a. C. revelan la envergadura que alcanzó el fraude electoral en el estertor de la República. Se multiplicaron las acusaciones y procesos por *ambitus*<sup>227</sup>, *vis* y *sodaliciis*, mostrando no sólo la inutilidad de las leyes de la corrupción, incapaces de frenar este fenómeno, sino especialmente la degradación política y moral de la *nobilitas* que había puesto sus intereses personales muy por encima de los intereses generales, pero también la del pueblo que se dejaba corromper por cualquiera que le ofreciera algo. Existía la convicción generalizada, en políticos y votantes, de que sin sobornos no se podían alcanzar las magistraturas. Los narradores de este período prestaron más atención hacia la codicia de quienes corrompían al pueblo que sobre los corruptos, sin ser completamente conscientes<sup>228</sup> de que el cuerpo electoral en su conjunto, todos, ricos y pobres, tribus y centurias, la ciudadanía en general, tenía tanta culpa como los corruptores pues formaban parte activa de ese entramado inmoral y recibían una suculenta retribución por su colaboración activa. Las formas mediante las que se materializaban las prácticas corruptas constituyen el objeto de la tercera parte de este escrito.

### III. AMBITUS. PRÁCTICAS PROHIBIDAS

21. Como conclusión del trabajo, es necesario realizar un breve repaso por las prácticas más usuales que derivaban en *ambitus*, tanto las cometidas en el período propio de campaña como las realizadas con anterioridad a la petición de la magistratura pero siempre con la vista puesta en la *petitio*. En la praxis, existía un período de tiempo que oficialmente servía de campaña electoral: los veinticuatro días que mediaban entre la convocatoria electoral y el día de las elecciones, un lapso que debía ser por muchos

---

224 No consideramos como republicana la ley dada por Augusto en el a. 18 a. C. (*Lex Iulia de ambitu*) por entender que en el Principado no se dio una continuidad real del sistema electoral republicano (exceptuando las elecciones de los magistrados municipales que sí continuaron celebrándose y sería precisamente en ese marco donde tuvo aplicación la *Lex Iulia*). Bajo el reinado de Augusto los magistrados eran elegidos por el pueblo todavía, pero a propuesta del *princeps*. Formalmente Tiberio transfirió al Senado esta potestad: Vid. D.48.14 pr.-1 (*Mod. 2 poen.*). Tac. *Ann.* 1.15. P.S. 5.30 a. Sobre la ley vid. FERRARY (2001), 196 ss.

225 Cic., *Planc.*, 36 y 44; Plut., *Cato min.*, 48.5; App., *bell. Civ.* 2.23. Dion Cass. 40.52. Caes. *Bell.civ.* 3.1.4.

226 Sobre esta *lex*: LINTOTT (1990), 9 y 10. ARBIZU (2000), 282 y 283.

227 Los principales juicios narrados en GRUEN (1968), *passim*.

228 No es el caso de Juvenal quien, criticando al pueblo, expresa: *Ya hace tiempo, desde que no se venden los sufragios, los asuntos públicos no le interesan... (Sat., 10.77).*

motivos un auténtico espectáculo urbano<sup>229</sup>, pero para los candidatos al consulado y otras magistraturas, realmente la campaña había empezado muchos años antes, pues la popularidad, los éxitos y triunfos acumulados a lo largo de su vida política y militar eran esgrimidos permanentemente y suponía una de las armas principales. Una forma de presentarse ante el pueblo y adelantar las propuestas era a través de la convocatoria de *contiones*. La *contio*<sup>230</sup> era la asamblea ciudadana en la que magistrados y candidatos defendían sus proyectos legislativos o programas de acción y debatían acerca de los mismos, aunque no llegaba a votarse ninguna moción. Si bien es cierto que no existían *contiones* preelectorales como tales que sirvieran como debate previo a unas elecciones, como ha recordado Pina Polo<sup>231</sup>, muchas de las que se convocaban tenían un claro sentido político y electoralista, pues servían para presentar un candidato, descalificar a los rivales, transmitir ideas o rememorar los triunfos de un general. En suma, ejercicios de verdadera propaganda política<sup>232</sup>. La campaña electoral y cualquier otro acto del que se buscara una repercusión en forma de votos, solía realizarse en el corazón político y social de la ciudad, fundamentalmente en el Foro<sup>233</sup>. Si exceptuamos los lugares cívicos en que se constituían las asambleas y las *contiones*, no existía un lugar o espacio específico en donde llevarse a cabo la campaña, de forma que era normal que los candidatos visitasen los barrios y lugares emblemáticos de Roma y alrededores para contactar con sus conciudadanos. Por ser costumbre inveterada y por razones naturales se permitía al candidato darse a conocer entre los ciudadanos, saludarles nominalmente<sup>234</sup> (*salutatio*)<sup>235</sup>, estrechar sus manos (*pressatio*) y pedirles el voto de forma directa. Era la más antigua forma de hacer campaña y absolutamente corriente en la conciencia romana<sup>236</sup>; por eso nunca fue prohibida. Pero el *candidatus* debía cuidar que el contacto con sus electores no derivara en alguna de las conductas o prácticas prohibidas que eran objeto del delito de *ambitus*. Si analizamos la abundante legislación al respecto, los límites entre el necesario contacto personal y la posible conducta fraudulenta y, por tanto, ilegal, debieron ser muy difusos. En este

229 *Procura que toda tu campaña sea ostentosa, brillante, espléndida, que sea popular, que tenga el mejor aspecto y dignidad* (Q. Cic., *Comm. pet.*, 52).

230 En mayor profundidad PINA POLO (1989), 41 ss. PINA POLO (1997), 47 ss. MORSTEIN-MARX (2004), 7 ss. HÖLKEKAMP (1995), 27 ss. MOURITSEN (2001), 38 ss. TAYLOR (1966), 15 ss.

231 PINA POLO (1989), 115 ss. PINA POLO (2005), 142 y 143.

232 PINA POLO (1997), 21.

233 DENIAUX (1987), 280 ss.

234 Habitualmente mediante el auxilio de *nomenclatores*, esclavos que acompañaban al candidato y que conocían el nombre de un gran número de ciudadanos. Como recuerda GRIMAL (2007), 316, desde el s. I a. C. y en época imperial las familias de la alta sociedad disponían siempre de un *nomenclator* que como función principal tenía la de saber a primera vista el nombre, fortuna, conexiones, etc. de las personas que entraban en contacto con sus amos, con el objeto de informarles con celeridad. Eran también útiles en la *domus* del noble durante la celebración de banquetes y fiestas, y especialmente en el reconocimiento de los numerosos clientes que a diario visitaban al patrón. Vid. Hor., *Ep.*, 6.1.50-55. Sen., *ad Luc.*, 2.19.11. Cic., *Mur.* 36. Séneca, con ironía, decía que muchas veces se inventaban los nombres: (*de benef.* 1.3.10). Sobre la acción de servicio del liberto *nomenclator*: D.38.1.7.5 (*Ulp. 28 Sab.*).

235 NARDO (1970), 20 y 21.

236 MOMMSEN (1985), v. 2, 124 y 125. DE SANCTIS (1923), 496.

sentido, quedaban bajo sospecha ciertas actividades que bajo una apariencia de licitud podían, sin embargo, esconder conductas inmorales que perseguían el fraude electoral<sup>237</sup>. Y de la abundante legislación se puede colegir que el *ambitus* fue un delito en continua evolución<sup>238</sup> y que no era fácil probar que se había cometido de forma intencionada, de ahí que no siempre prosperaran las acusaciones de *ambitu* en los Tribunales a pesar de existir la convicción moral general de la existencia de conductas deshonestas<sup>239</sup>. Todo lo que rodeaba al proceder de los candidatos, sus actos y palabras, lo sospechoso y lo no tan sospechoso, todo formaba parte del juego electoral, del teatro de la política, convirtiéndose en un arma arrojadiza susceptible de ser utilizada por cualquier aspirante: la acusación de *ambitus*. De una forma casi despiadada convenía Quinto Cicerón en la importancia de levantar rumores sobre sobornos u otros escándalos de los rivales durante la campaña electoral como una estrategia más<sup>240</sup>.

Entonces ¿qué comportamientos o prácticas eran considerados ilícitos? En consonancia con lo que venimos diciendo, no existía en Roma un criterio claro ni mucho menos un concepto legal de todo lo que podía ser considerado como *ambitus*<sup>241</sup>. No obstante, ciertos actos estuvieron siempre comprendidos en la idea de soborno electoral. En primer lugar y desde antiguo la compra de votos<sup>242</sup>, es decir, la entrega de dinero, regalos u obsequios a los electores a cambio del *suffragium*, sin duda la acción más explícita y dolosa; pero también otros hábitos menos evidentes como fue el rodearse de un excesivo número de acompañantes o cortejo electoral, la remuneración a las personas de ese séquito, agasajar a la ciudad y a sus vecinos mediante cenas, banquetes, distribuciones de alimentos, celebración de juegos u otros espectáculos (que unas veces fue considerado *ambitus* y otras simplemente donaciones del candidato al pueblo), o finalmente, y también de carácter grave, algunas formas de violencia ejercida por grupos dirigidos a obstaculizar el resultado de una votación o a procurar votos para los candidatos mediante actividades o presiones ilegales, que como ya se ha visto llegó a constituir un tipo delictivo independiente del *ambitus* (*crimen sodalicio*). Tales actividades no sólo estaban prohibidas durante la campaña electoral, sino que en algunas leyes la interdicción se extendía a los dos años anteriores al día en que se comenzara a desempeñar el cargo<sup>243</sup>. Aunque las actividades fueran materialmente realizadas por otras personas, durante la mayor parte de la República sólo el candidato electo mediante prácticas ilícitas podía ser inculcado por *ambitus*<sup>244</sup>. Eso significaba una lucha improductiva contra la corrupción pues no se perseguía a los

---

237 MURGA (1992), 116.

238 FASCIONE (1984), 82.

239 Plaut., *Amph.*, 75.

240 Q. Cic., *Comm. Pet.*, 52. NARDO (1970), 91 y 92.

241 YAKOBSON (1999), 23.

242 MOMMSEN (1955), 668, 868 y 874. DE SANCTIS (1907), v. 2, 235.

243 El caso, v.gr., de la *Lex Tullia de ambitu* (63 a.C.) o de la *Lex ursonensis* (44 a.C.) en el ámbito de las elecciones municipales.

244 Cf. FASCIONE (1984), 83.

que se dejaban corromper (centurias y tribus, el pueblo en general) ni tampoco a los que actuaban de intermediarios entre unos y otros (*divisores, sectatores, sequestres*, los líderes de las tribus o los *sodalis*). Cuando al final de la República las medidas legislativas se extendieron también a estos últimos sujetos puede celebrarse que corruptores y corruptos pagasen, cada uno en su medida, por el grave atentado hacia la libertad y el sistema electoral que paulatinamente iba socavando la moral y dignidad romanas.

Antes decíamos que no siempre era fácil probar la acusación de *ambitus*. Muchas veces se denunciaban actos cuya práctica era tradicional, y aunque se hubieran realizado de forma premeditada eran susceptibles de admitir alegaciones en su defensa y ser objeto de una interpretación benigna, pues el efecto que causaban en el resultado electoral no era determinante. Piénsese, por ejemplo, en todos aquellos que se ejecutaban para ganar la popularidad y el apoyo de la plebe urbana, cuyo voto no era generalmente determinante<sup>245</sup> dado el sistema de votación (sobre todo en los comicios centuriados) que hacía que en muchísimas ocasiones no llegara siquiera a ser emitido. Sin embargo, el calor de la multitud era deseado por todo candidato pues le otorgaba un gran prestigio: que el pueblo le amara tenía valor político<sup>246</sup>. Entre estas actividades sobresalían los banquetes populares, los funerales consagrados a la memoria de los miembros de la *nobilitas*, la celebración de juegos o el reparto de carne y otros alimentos. Aunque indudablemente influían en las opciones de ganar de los magistrados, existía el convencimiento de que más que soborno eran actos de generosidad<sup>247</sup> y en ciertas ocasiones podían estar justificados, como en los casos de reciente muerte o enlace nupcial de un familiar del candidato.

22. La celebración de juegos y combates de gladiadores<sup>248</sup> respondía a una antigua costumbre que no estaba únicamente ligada a intereses electorales, porque también se oficiaban con ocasión de festividades religiosas y en los funerales de personas nobles (las luchas de gladiadores)<sup>249</sup>. Al mismo tiempo era una forma con la que el Estado compensaba a la ciudadanía del desgaste que producía el constante servicio militar<sup>250</sup>. La razón de que fueran restringidos fue porque aumentaban considerablemente la *popularitas* de quien los oficiaba, provocando una competición entre los propios miembros de la *nobilitas* para

---

245 YAKOBSON (1999), 20 ss., dedica una parte significativa de su estudio a demostrar que el voto de las clases populares tenía más importancia de lo que tradicionalmente se ha puesto de manifiesto. Indudablemente la plebe mostraba sus preferencias por ciertos candidatos y Mario es un claro ejemplo (Sall. *Iug.*, 73), como cita este autor, pero una cosa era el clamor popular y las adhesiones mostradas a ciertas personas y otra bien diferente el valor político que tenía su opinión en la asamblea centuriada en la que votaban en último lugar si no se había alcanzado una mayoría antes (Cic. *de Rep.* 2.39; Liv. 1.43.11; Dion Cass. 4.18.2). Gráficamente afirmaba Cicerón: "*aunque nos votan, no tienen ninguna influencia*" (*Mur.*, 71).

246 Cic., *de off.*, 2.7. VEYNE (1976), 415 ss. SYME (1939), 13.

247 COSTA (1927), 97.

248 Vid. GUILLÉN (2002), 333 ss. BEARD (2009), 374 ss.

249 GUILLÉN (2002), 351-353 con lit., señala el rito funerario como principal y más antiguo motivo para organizar estas luchas que terminarían haciéndose popularísimas entre el pueblo. Menos antigua que la anterior, pero de creciente importancia en el último tercio de la República y durante el Imperio, pueden ser también nombradas las *venationes* (exposición y lucha de animales salvajes y exóticos): GUILLÉN (2002), 360 ss.

250 DE SANCTIS (1923), 492.

ofrecerlos cada vez más espectaculares y grandiosos. Los ediles eran los magistrados que se encargaban de la celebración del mayor número de juegos, de forma que esta magistratura, aun siendo de las consideradas *menores*, tenía una gran importancia en el *cursus honorum* pues proporcionaba una gran proyección en los jóvenes políticos que aspiraban a la pretura y al consulado<sup>251</sup>. Por ese motivo, la edilidad era la magistratura más gravosa para sus detentadores. Que los *aediles* organizaran juegos suntuosos no se consideraba *ambitus*, así lo recordaba Cicerón en su defensa a Murena acusado de corrupción electoral; es más, era parte del juego político<sup>252</sup> y un servicio prestado a la ciudadanía, especialmente a la popular, que los recordaba durante años y solían agradecerlo votando al organizador en futuros comicios. Puesto que formaban parte de la cultura popular romana, prohibirlos o catalogarlos como *ambitus* habría sido una decisión política muy difícil de mantener ante el pueblo llano. Sin embargo, en la fase final de la República y dada la magnitud que había alcanzado la corrupción, la *Lex Tullia de ambitu* finalmente los restringió a magistrados y candidatos durante los dos años anteriores a la petición de la magistratura, con la excepción de su imposición *ex testamento*, porque la praxis demostraba que en efecto se celebraban exclusivamente con fines electorales<sup>253</sup>. Otra cosa era la distribución de localidades gratuitas para los espectáculos entre las tribus. El arpinate recordaba en la misma *oratio pro Murena* que este caso sí se consideraba como delito<sup>254</sup> cuando se hacía a gran escala, esto es, cuando se hacía de forma colectiva y no de forma individual<sup>255</sup>.

23. Banquetes y convites populares constituían otra fuente importante de popularidad y de votos<sup>256</sup>. Salustio lo consideraba una costumbre perversa entre los nobles: *certe quibus maxima industria videtur salutare plebem et conviviis gratiam quaerere*<sup>257</sup>. Lo cierto es que se daban con mucha frecuencia a pesar de las constantes limitaciones de las *leges sumptuariae* que, sin embargo, eran inobservadas probablemente con el beneplácito de todos, *nobiles* y *plebs*. Craso<sup>258</sup> hizo preparar diez mil mesas para un banquete público y César<sup>259</sup>, años después, dejó ridícula esa cifra cuando el banquete que regaló al pueblo hubo de ser servido en veintidós mil mesas. Desde luego se hacían con fines populares

251 Cic., *Att.*, 4.16.6. *Plut. Sull.*, 5. TAYLOR (1984), 30 ss. DENIAUX (1987), 298. YAKOBSON (1992), 39.

252 Cic., *Mur.*, 40: "Así pues, créeme, los juegos deleitan a la gente, no sólo a los que lo reconocen sino también a los que se lo callan. Yo lo experimenté en el tiempo de mi candidatura, pues también nosotros tuvimos que competir con los espectáculos. Y si yo que, siendo edil había organizado tres juegos, me sentía, no obstante, intranquilo por los de Antonio".

253 Cic., *Vat.*, 15.37. *Asc., pro Sest.*, 133 (Stang. p. 140): *Praescribatur enim inter cetera, ne candidatus ante biennium quam magistratum petiturus esset, munus populo ederet, propter ambitum scilicet, ne hoc ipso popularis animus eblanditus designationi eius succumberet.*

254 Cic., *Mur.*, 67: "...repartir, de modo general, por tribus, localidades para los juegos de gladiadores...". *Ibidem*, 72.

255 Cic., *Mur.*, 73: "...¿Y dar entradas para un espectáculo o invitar a comer? En absoluto, a no ser que se haga en general y por todas partes. ¿Qué quiere decir "en general"? A todo el mundo".

256 Aunque YAKOBSON (1992), 39, no cree que puedan ser considerados una forma de corrupción electoral.

257 Sall., *Bell. lug.*, 4.3.

258 *Plut., Crass.*, 12.2.

259 *Plut., Caes.*, 55.4.



electoralistas, y en estos casos no puede alegarse la costumbre generalizada que tenían los romanos de invitar con tanta frecuencia, sobre todo a cenar, a un círculo amplio de amigos y conocidos<sup>260</sup>.

24. Las distribuciones gratuitas de grano, carne o aceite al pueblo eran una inmejorable estratagema para ganar la adhesión popular. Antes recordábamos una de esas primeras muestras de generosidad interesada que se llevó a cabo en época muy temprana (la distribución gratuita de grano en el a. 440 por parte de Espurio Melio) y no fue la última, desde luego, ya que la literatura latina pone de manifiesto que no dejaron de reproducirse a lo largo de los siglos: M. Flavio, C. Graco, Clodio, Craso, César...<sup>261</sup>. Naturalmente, las *leges frumentariae* ocupan un puesto especial en este apartado: cada vez más frecuentes en el último tramo de la República, eran una de las armas preferidas por los tribunos para ganar la adhesión social, aunque como no estaban bien vistas por el Senado y por alguno de sus colegas que oponían el veto<sup>262</sup>, muchas no salieron adelante y solían perjudicar la carrera futura de los proponentes pues perdían el apoyo de la aristocracia senatorial más conservadora<sup>263</sup>.

25. La celebración de funerales era una vieja tradición de la nobleza republicana que servía tanto para granjearse la admiración de las clases altas como la simpatía de la muchedumbre. Polibio describió magistralmente los funerales romanos y la conmoción que causaban en la multitud<sup>264</sup>. La pronunciación de la *laudeatio funebris*<sup>265</sup>, por ejemplo, podía tener un gran impacto en la proyección política de un joven *nobilis*<sup>266</sup>. Como hemos dicho más arriba, las exequias de un personaje notable constituían para el pueblo otra forma de entretenimiento pues solían ser acompañadas por la celebración de combates de gladiadores, uno de los juegos preferidos –por ello, otro buen granero de votos– de los romanos.

26. El séquito de ciudadanos (*sectatores*) que tradicionalmente acompañaba al candidato tenía también repercusiones en la marcha de la campaña electoral, aunque como los anteriores, era difícil enjuiciar cuando una comitiva demasiado nutrida podía constituir una forma de *ambitus*. Para ello fue dictada la *Lex Fabia de numero sectorum* en el a. 64<sup>267</sup>. Por un lado la ley limitaba el número de acompañantes y prohibía remunerar –*conductio sectorum*– a la comitiva o ciudadanos que la componían (Cicerón lo amplía

260 Léase a este respecto el divertísimo pasaje de Plaut., *Stich.*, 510-16

261 Cic., *Vat.*, 12.30; 13.31; *de off.*, 2.21; *Phil.*, 2.45.116. Liv. 8.22.2 ss.; 39.46.2 y 3; 41.28.11. Plut. *Caes.*, 5; 55.4; *Crass.*, 12.2. PUCCI (1989), 376 ss.

262 Sall., *Cat.*, 38. Es conveniente leer Cic., *de rep.*, 1.19.31, donde el arpinate se pregunta ¿por qué en un solo Estado hay dos Senados y casi dos pueblos?.

263 Gran repercusión tuvieron la *Lex Sempronia frumentaria* (a. 123), la *Lex Terentia Cassia frumentaria* (a. 73), o *Lex Clodia frumentaria* (a. 58). ROLDÁN HERVÁS (1980), 89 ss. ARBIZU (2000), 79 y 80, 115 y 116, 180.

264 En un texto de obligada lectura: Pol. 6.53.

265 PINA POLO (2005), 152 ss.

266 Recuérdese, por ejemplo, los discursos funerarios pronunciados por un joven J. César con ocasión de la muerte de su tía Julia, la mujer de Mario, y de su esposa Cornelia, y el efecto que produjeron: Plut., *Caes.*, 5. Sobre estas intervenciones: MILLAR (1986), 5.

267 ROTONDI (1990), 378 y 379.



también para aquellos otros que simplemente salían a saludar al candidato en el transcurso de sus visitas al Foro o a los barrios)<sup>268</sup>; pero por otro, se trataba de una práctica habitual en el seno de una sociedad que era muy proclive a la alabanza y al contacto directo entre clases sociales, y aunque algunas veces las aclamaciones o saludos se producían de manera inducida, muchas otras obedecían al mero deseo del *civis* de tocar o saludar al candidato, a la simple espontaneidad del votante<sup>269</sup>. Cicerón enmarcaba esta costumbre en la tradicional interrelación entre las clases sociales y los deberes propios de las relaciones clientelares como era el apoyo político: *Homines tenues unum habent in nostrum ordinem aut promerendi aut referendi benefici locum, hanc in nostris petitionibus operam atque adsestationem*<sup>270</sup>. A través de este tipo de gestos, el ciudadano humilde se sentía integrado en la vida pública<sup>271</sup>, porque el cortejo principalmente estaba compuesto por ciudadanos humildes, desocupados, pertenecientes a las clientelas del *petitor*, ya que los prohombres no podían por sus obligaciones acompañar permanentemente al amigo candidato<sup>272</sup>. El hecho de auxiliarse en el *nomenclator* para el saludo nominal a los electores nada tuvo de ilícito durante largo tiempo<sup>273</sup>, si acaso podía pecar de indignidad quien los utilizaba, pues decía Cicerón<sup>274</sup> –no sin cierta hipocresía<sup>275</sup>– que era bochornoso que un esclavo conociera mejor a la ciudadanía que el propio candidato. Plutarco<sup>276</sup> afirma que en el primer tercio del s. I estaba vigente en Roma una ley por la que se prohibía el uso de *nomenclatores*, pero no está claro a qué ley puede referirse<sup>277</sup>. Los *sectatores* cumplieron otra función esencial especialmente en los últimos tiempos de la República: la de actuar como escolta protegiendo al *candidatus* de posibles atentados. Porque, efectivamente, la violencia pública que patrocinaron algunos políticos en su camino hacia las magistraturas<sup>278</sup> fue un fenómeno desestabilizador que agudizó la crisis de las instituciones políticas y que constituía otra forma más de corrupción y de *vis*, como ya hemos comentado. Recapitulando, lo que se consideraba *ambitus* era asalariar a los miembros de la comitiva, pagarles por el acompañamiento<sup>279</sup>, que, sin embargo y por simple lógica, parece lo más probable que sucediera a tenor de la condición social de estos. Desde luego no conocemos un sólo proceso que fuera iniciado por infracción de esta ley *Fabia*<sup>280</sup> y lo cierto es que clientelas

268 Cic., *Mur.*, 67 y 73. NARDO (1970), 21.

269 Cic., *Mur.*, 68 y 69.

270 Cic., *Mur.*, 70.

271 ROLDÁN HERVÁS (1984), 73 y 74.

272 Cic., *Mur.*, 70.

273 ROTONDI (1990), 378 y 379, no cree que la *Lex Fabia* prohibiera el acompañamiento por *nomenclatores*.

274 Cic., *Mur.*, 36

275 Pues él mismo los utilizaba: *ad Att.*, 4.1.5.

276 Plut. *Cat. Min.*, 8.2.

277 COLI (1957a), 535. FERRARY (2001), 170 y 171. DENIAUX (1987), 286.

278 WOOD (1988), 185.

279 FASCIONE (1984), 70 y 71. Cic., *Mur.*, 67 ss.

280 FERRARY (2001), 171.

y amigos mantuvieron la costumbre de convoyar a sus patronos por la impotencia que manifestó la disposición para su cumplimiento. Los romanos lo entendían como una forma natural de propaganda electoral: no hay más que leer el *Commentariolum petitionis* para hacerse una idea muy clara del papel que desempeñaban<sup>281</sup>.

27. Muchos electores, asimismo, tuvieron que sufrir enormes presiones a la hora de ejercer su derecho a voto el día de las elecciones. Se trataba, en el último momento, de coaccionar al ciudadano para que votara por un determinado candidato. La libertad de voto, por motivos fácticos, no estuvo garantizada plenamente en las épocas en que se votaba de forma oral, ya que el *rogator* interrogaba al elector sobre el sentido de su voto en presencia de los jefes de la unidad, lo que permitía controlar de forma efectiva el voto de todas las clientelas de los candidatos<sup>282</sup>. Efectivamente, las clientelas jugaban un papel importante en las elecciones<sup>283</sup>, sobre todo al principio de la República. Clientes, libertos o todo aquel que de cualquier forma hubiera recibido ayuda por parte de una casa aristocrática contraía con ella una obligación de fidelidad y de apoyo político. No sólo importaban las clientelas urbanas, sino también las italianas y las militares, pues no hay que olvidar, como recordó Cicerón, que en los comicios consulares se elegían líderes militares y no meros intérpretes de palabras<sup>284</sup>. La *Lex Gabinia* del 139 a.C. que introdujo el *suffragium* escrito y, por tanto, secreto, proporcionó más libertad al ciudadano ya que alivió el control sobre las clientelas<sup>285</sup>, de lo que se quejaba Cicerón<sup>286</sup>, pero aun así las presiones siguieron existiendo porque veinte años más tarde, en 119, se aprobó la *Lex Maria de suffragiis ferendis* por la que se ordenaba el estrechamiento de las dimensiones de los puentes o pasarelas<sup>287</sup> que daban acceso al lugar de votación con el único propósito de mitigar la coacción que en ese intervalo podía sufrir el votante<sup>288</sup>. La picaresca en el voto escrito debió ser harto frecuente: Varrón relata el episodio en que un individuo fue sorprendido introduciendo en la urna tablillas (votos) a favor de un candidato<sup>289</sup> y Plutarco cuenta que Catón el Joven consiguió que se anularan las elecciones edilicias del año 53 en cuanto comprobó que todas las tablillas que daban la victoria a uno de los candidatos

---

281 Q. Cic., *Com. pet.*, 34-38.

282 Plut., *Aem. Paul.*, 31. La razón del voto oral, según HUMBERT (1991), 223, se encontraba precisamente en la ideología oligárquica y timocrática, pues así podía controlarse mejor el voto de las clientelas. WIRSZUBSKI (1950), 32.

283 BETTI (1982), 26 ss. MOMIGLIANO (1940), 78. YAKOBSON (1999), 66 ss. En el sentido de rebajar la importancia de la clientela en las elecciones republicanas BRUNT (2004), 44 ss.

284 Cic., *Mur.*, 38. BREONE (1989), 125 y 126.

285 Vid. NICOLET (1970), 39 ss. NICOLET (1988), 386. WISEMAN (1971), 4. TAYLOR (1966), 35 ss. y 126 n. 9. GRUEN (1968), 49.

286 Cic., *de leg.*, 3.15.33 ss.

287 Suet., *Iul.*, 80.

288 Plut., *Mar.*, 4.2.; Cic., *de leg.*, 3.17.38. Liv. 39.32.12. GRUEN (1968), 120 ss. LINTOTT (1968), 71. TAYLOR (1966), 39 ss. NICOLET (1959), 203 y 204.

289 Varr., *rer. rust.*, 3.5.18: "*Mientras hablábamos de estas cosas, se levanta un clamor en el campo de Marte...se nos acerca Pantaleo Parra y dice que cuando contaban los votos en la mesa electoral cogieron a uno echando tablillas de voto en la urna y los partidarios de los competidores lo arrastraron hasta el cónsul. Pavo se levanta porque el que decían que habían cogido era el interventor de su candidato*".

estaban escritas por la misma mano<sup>290</sup>. Acciones, por tanto, absolutamente fraudulentas que no fueron contempladas por la legislación republicana en ningún momento, y solo la autoridad del magistrado-presidente de los comicios podía estimarlas contrarias a derecho anulando el resultado<sup>291</sup>. Sin embargo, la falta de libertad en el voto oral no fue nunca considerada como una forma de *ambitus*.

28. La acción más grave<sup>292</sup> contemplada dentro del *crimen ambitus* era la compra de votos, pues suponía la auténtica manipulación de la voluntad popular y el medio más efectivo para asegurarse el deseado resultado en las elecciones. La instauración del voto secreto tuvo que acentuar esta práctica fraudulenta, ya que se perdieron los medios de controlar el voto de clientelas y electores en general. Debido al sistema electoral se compraba tanto o más a los ricos, a los *equites* y ciudadanos de la Primera Clase o de las tribus rústicas, que a los *proletarii*, dada la escasa influencia de estos últimos en el resultado electoral. Un candidato a cónsul no tenía grandes posibilidades de salir elegido si no tenía el apoyo del *ordo equester* y la Clase I. Lucio Murena fue acusado de sobornar al orden ecuestre<sup>293</sup>. En este contexto, de enorme importancia era ganarse el voto -o comprarlo- de la centuria de primera clase que votaba en primer lugar, la *centuria praerogativa*<sup>294</sup>, pues el sentido de su sufragio tenía valor augural<sup>295</sup> y solía determinar la tendencia de voto de las restantes. Aunque el dinero también llegaba a las clases populares<sup>296</sup> (no sólo a los *proletarii*, porque la V Clase de los *comitia cennturiata* contaba con treinta votos y no se trataba de ciudadanos ricos)<sup>297</sup>, sobre todo obedecía a razones de prestigio personal y popularidad, a la fuerza que otorgaba tener del propio lado a un cuerpo electoral ruidoso y a veces violento, más que a una efectividad práctica para el resultado de la votación. Pese a que su radio de influencia fuera muy escaso en las elecciones de magistrados mayores, no hay que olvidar, como ha puesto de manifiesto A. Yakobson<sup>298</sup>, que también votaban para la elección de magistraturas menores en los *comitia tributa*, donde el sistema de votación les era más propicio. Era importante desde el primer momento contar con ese apoyo y mantenerlo. Desde luego, además de remunerárselo, nada mejor que ir reforzándolo paulatinamente a través de las frecuentes *largitiones* con que se les agasajaba.

En la compra de votos jugaban un papel fundamental los *divisores* de las tribus y centurias, verdaderos agentes electorales<sup>299</sup> que repartían entre sus miembros las cantidades convenidas con el candidato. Las actividades de los *divisores* fueron denunciadas por

---

290 Plut. *Cat. Min.*, 46.3.

291 CERAMI (2007), 367 ss. DE MARTINO (2003a), 76 ss. Cf. CASSOLA (1962), 14-16.

292 NICOLET (1991), 57.

293 Cic., *Mur.*, 47. MOMMSEN (1985), t. 6.1, 458.

294 El soborno a esta centuria por parte de dos candidatos al consulado en el a. 53 es narrado por Cic., *ad Q. frat.*, 2.14.4.

295 Cic., *Mur.*, 38; *de div.*, 1.103.

296 YAKOBSON (1999), 38.

297 YAKOBSON (1999), 26.

298 YAKOBSON (1992), 50. Igualmente WISEMAN (1971), 125.

299 Suet., *Aug.*, 3. MOMMSEN (1985), t. 6.1, 221.

primera vez en el proceso contra Verres (70 a. C.)<sup>300</sup>, en el que Cicerón ejerció la acusación, pero sus ilícitas acciones habían dado comienzo tiempo atrás<sup>301</sup>. El dinero que se repartía había sido previamente puesto en manos de un garante o depositario (*sequester*)<sup>302</sup> que lo entregaba a los *divisores*, una vez realizada la votación y comprobado que se había votado en la forma pactada, para que procedieran a su reparto (*divisio pecuniae*). La participación<sup>303</sup> del *sequester* cumplía una doble función: por un lado, garantizaba el pago efectivo una vez realizada la votación, descartando la posibilidad de que el candidato se negara a hacerlo; y por otro, liberaba de los temores al *petitor* de pagar por adelantado sin tener la certeza de que efectivamente votaran por él<sup>304</sup>. Esta especie de *banqueros*<sup>305</sup> prestaba igualmente sus servicios cuando se sobornaba a los jurados en las *quaestiones*. Aunque, por regla general, el dinero de los sobornos se entregaba para su reparto en las casas de los *sequestres*<sup>306</sup>, hubo candidatos que lejos de actuar con discreción procedieron a la distribución del dinero en sus propios domicilios<sup>307</sup>, actuando ellos mismos como depositarios<sup>308</sup>. A diferencia de los *divisores* que eran oficiales de las respectivas tribus, el *sequester* era una persona escogida por el sobornador, por lo que respondía ante éste y no ante las tribus por el reparto que posteriormente hicieran los *divisores*. Sin embargo, es indudable que los *divisores* actuaban también en nombre del candidato<sup>309</sup>. La *Lex Calpurnia de ambitu* del 67 a.C. extendió la responsabilidad a los *divisores*, aunque no así a los *sequestres*, quienes nunca habían respondido ni responderían por sus prácticas corruptas. El acoso a los distribuidores era, indudablemente, una buena política en el intento de sancionar a todos los que participaban en la corrupción electoral, y no sólo al magistrado corruptor, pues aunque éste fuera el máximo responsable, los *divisores* eran una parte integral del entramado de la corrupción y la legislación, por tanto, logró apuntar al corazón de la misma<sup>310</sup>.

---

300 Cic., *Verr.*, 1. 22; 23; 25.

301 LINTOTT (1990), 7.

302 Vid. Cic., *Cluent.*, 72. HUSBAND (1916c), 19 y 20.

303 Nótese la persistencia de la figura del *sequester* en época posterior en la siguiente denuncia de Plinio el Joven: *Con ocasión de los últimos comicios* (se refiere Plinio a las elecciones de magistrados municipales del a. 107 d. C. bajo el reinado de Trajano), *el Senado con el propósito de garantizar la total honradez del proceso manifestó que debían observarse las siguientes normas: Que los candidatos no celebren banquetes, que no envíen presentes, que no depositen dinero en manos de intermediarios a fin de comprar votos. De las tres prácticas censuradas, las dos primeras se llevaban a cabo no sólo abiertamente, sino de forma generalizada, y en cuanto a la tercera, aunque se ocultaba, todos sabían de su existencia* (Plin., *Ep.*, 6.19.1 y 2).

304 HERNÁNDEZ-TEJERO (2007-2008), 280.

305 LINTOTT (1990), 8.

306 Cic., *ad Att.*, 4.16.4; 1.18.6. *Verr.*, *Act. Pr.*, 22, 23 y 25.

307 Cic., *ad Att.*, 1.16.7. *Plut.*, *Pomp.*, 44; *Cat. Min.*, 30.

308 En este sentido Cic., *Planc.*, 16.38: *Cuius tu tribus venditorem et corruptorem et sequestrem Plancium fuisse clamitas...*

309 YAKOBSON (1999), 51.

310 McDONALD (1929), 204. Recuérdese la *rogation Aufidia de ambitu* del a. 61 en torno a los *divisores* que hemos tratado en el lugar correspondiente.

29. En el último tramo de la República se convirtió en una indigna y peligrosa costumbre la actuación de bandas organizadas ciertamente violentas que ejercían presiones ilícitas sobre los electores<sup>311</sup>. La *Lex Licinia de sodaliciis*, del 55 a.C., ya se ha dicho, tipificó estas últimas intervenciones agresivas como *crimen sodaliciorum*<sup>312</sup>, una forma de corrupción electoral violenta perpetrada por los grupos políticos<sup>313</sup> que afectaba directamente a la seguridad ciudadana y la de los propios candidatos<sup>314</sup>. El renacer de esta forma de violencia había tenido lugar muy poco tiempo antes, tras el intento de golpe de Estado de Catilina<sup>315</sup> y sobre todo durante el tumultuoso tribunado de P. Clodio (a. 58), que había restaurado la actividad de los *collegia (sodalitates)* –prohibidos por el Senado en 64 a. C.– utilizándolos, precisamente, con fines de presión electoral y de agitación en las calles<sup>316</sup>. Violencia organizada que derivaba en corrupción electoral organizada<sup>317</sup>, pues a través de las *sodalitates* no sólo se podía impedir a los ciudadanos el ejercicio del *ius suffragii* impidiéndoles el acceso a los lugares de votación<sup>318</sup>, sino que también eran empleadas para perfeccionar con mayor efectividad todos los negocios de compraventa de votos. Quinto Cicerón recomendaba a su hermano Marco que buscara el apoyo de los *collegia* en el transcurso de su campaña hacia el consulado: obviamente omitía cualquier alusión a una utilización fraudulenta de los mismos, pero señalaba la importancia de contar con el apoyo de los líderes de las corporaciones como una forma de conseguir más adhesiones sociales a su candidatura<sup>319</sup>. En este sentido, tiene agudeza el matiz argüido por F. de Robertis en torno a la utilización que hicieron de los *collegia* los dos grandes partidos republicanos: por un lado, los conservadores se habrían servido de ellos para organizar mejor la propaganda electoral (*ambitus*); mientras que los *populares* los habrían empleado como agitadores con la función de provocar tumultos (*vis*)<sup>320</sup>.

311 Cic., *ad Att.* 1.16.13. FASCIONE (1984), 83 y 84.

312 SANTALUCIA (1998), 155 y 171 ss.

313 De *political clubs* habla HUSBAND (1916b), 11, como principal objeto de control de esta ley.

314 Cic., *Planc.*, 36; 44; *fam.*, 8.2.1

315 BRUNT (1966), 23.

316 Las bandas de Clodio y de Metelo estaban formadas tanto por hombres libres (de muy baja condición) como por esclavos, incluyendo también a muchos gladiadores: Plut., *Cat. Min.*, 27. Cic., *Dom.*, 54, 89 y 129; *Sest.*, 34. LINTOTT (1968), 74 ss.

317 HERNÁNDEZ-TEJERO (2007-2008), 281.

318 Sucesos de esta naturaleza se dieron en la República tardía: grupos armados a modo de barricadas o cordones humanos que impedían el libre derecho al voto en los comicios legislativos: Cic., *Phil.*, 5.3.8; *Dom.*, 110. Plut., *Cat. Min.*, 27. Como decía Cicerón: *in quibus primum et maximum, vis abesto* (de leg., 3.18.42).

319 Q. Cic., *Comm. pet.*, 30. Interpreta este fragmento como un consejo hábil aunque cargado de doble sentido (en alusión a un posible *ambitus*) HENDERSON (1950), 12.

320 DE ROBERTIS (1938), 128 ss.

30. Concluimos. Resulta evidente que al final de la República tanto los candidatos como el pueblo elector consideraban el soborno electoral como un negocio usual<sup>321</sup>. La decadencia moral<sup>322</sup> de todos ellos, de la nobleza electiva por sus ambiciones desmedidas, de quienes se dejaban corromper (el pueblo) por el interés y la necesidad, agravó una realidad que Plutarco diagnosticó como enfermiza<sup>323</sup>. No se vislumbró ni por parte de unos ni de otros el deseo de poner fin a las corruptelas. *Ardeat ambitus*, llegaría a clamar Cicerón<sup>324</sup>. Entre los años 70 y la dictadura de César la corrupción electoral, convertida en el fenómeno político más corriente, por primera vez afectó seriamente a la estabilidad de la República<sup>325</sup>. El incremento de ciudadanos con derecho a voto como consecuencia del *Bellum Socii* se pudo apreciar precisamente en el a. 70, fecha en que fueron incorporados por primera vez al censo<sup>326</sup>. Esto significaba la aparición de un nuevo potencial de votantes no necesariamente adscritos a patronos romanos junto a una aristocracia local que en virtud del *ius honorum* que le otorgaba la ciudadanía podía competir por vez primera por las magistraturas<sup>327</sup>. Si contamos, asimismo, con el desencanto de la *plebs* urbana y rústica que cada vez tenían menos que agradecer a los *nobiles*, y con la fractura política que existía en el seno de la *nobilitas*, no es extraño aventurar que el momento actual requiriese el empleo del dinero para obtener unos apoyos que antiguamente se conseguían fácilmente a través de la *clientela* o del prestigio personal<sup>328</sup>. El endurecimiento progresivo de las penas tampoco conseguía amedrentar a los candidatos. La frase que J. César profirió a su madre cuando concurrió a las elecciones sacerdotales ("*me verás como pontífice o en el exilio*")<sup>329</sup>, muestra a las claras que los nobles preferían someterse posteriormente a un proceso por *ambitus* (en el que también sobornarían al jurado) que competir limpiamente por las magistraturas, pues existía la certeza de que los otros candidatos también emplearían métodos corruptos. Como escribía Brunt, el recurso de la corrupción pura y simplemente aumentaba las probabilidades de victoria<sup>330</sup>. Inevitablemente un sistema político no puede mantenerse demasiado tiempo cuando la sociedad a la que sirve carece de principios éticos y constitucionales que lo respalden. Y así sucedió en Roma. La República, que había sido durante largo tiempo ejemplo de virtud y respeto a sus normas constitucionales, no pudo resistir tantas décadas de inestabilidad y corrupción.

---

321 Plut., *Cat. Min.*, 44.

322 MACKAY (2011), 18 y 19.

323 Plut., *ibidem*.

324 Cic., *Att.*, 4.15.7.

325 YAKOBSON (1999), 113.

326 Vid. WISEMAN (1969), 59 ss. PINA POLO (1994), 89 y 90.

327 WISEMAN (1971), 6 y 7.

328 MACKAY (2011), 40.

329 Suet., *Iul.*, 13.

330 BRUNT (2004), 42.

## BILIOGRAFÍA

- ADCOCK F.E. (1957) *Consular Tribunes and Their Successors*, JRS, 47. *Idem* (1964) *Roman Political Ideas and Practice*, Ann Arbor.
- ALFÖLDY G. *Historia social de Roma*, 3ª ed., Alianza Editorial, Madrid, 1996.
- ARANGIO-RUIZ V. *Historia del Derecho Romano*, 3ª ed. española, trad. de la 2ª ed. italiana, trad. de la 2ª ed. italiana por F. de Pelsmaecker, Ed. Reus, Madrid, 1974.
- ARCE J. Prólogo a R. Syme *La revolución Romana*, trad. de A. Blanco Freijeiro, Ed. Crítica, Barcelona, 2010.
- ARBIZU J.M. *Res Publica Opressa. Política popular en la crisis de la República*, Editorial Complutense, Madrid, 2000.
- BAUERLE E.A. *Procuring an election: Ambitio in the Roman Republic, 432-49 B.C.*, University of Michigan, 1991.
- BAUMAN R. *Lawyers in Roman Republic. A study of the Roman jurist in their political setting, 316-82 BC*, München, Beck, 1983.
- BEARD M. *El triunfo romano. Una historia de Roma a través de la celebración de sus victorias*, Barcelona, 2009.
- BEARD M./CRAWFORD M. *Rome in the late Republic*, Ithaca, New York, 1985.
- BETTI E. *La crisi della república e la genesi del Principato in Roma*, Roma, 1982.
- BISCARDI A. *Auctoritas Patrum. Problema di storia del Diritto Pubblico Romano*, Napoli, 1987.
- BOBBIO N. *El futuro de la democracia*, 3ª ed., México, 2007.
- BRETONE M. (1989) *Le XII Tavole e il senso della tradizione*, en Roma tra oligarchia e democrazia. Classi sociali e formazione del diritto in epoca medio-republicana, Napoli. *Idem* (1991) *Il tempo e la norma*, en Continuità e trasformazioni fra Repubblica e Principato. Istituzioni, política, società (a cura di M. Pani), Bari, 1991.
- BRUNT P.A. (1966) *The Roman Mob*, en Past & Present, 35 (dec. 1966). *Idem* (1971) *Social conflicts in the Roman Republic*, London. *Idem* (1982) *Nobilitas and Novitas*, JRS, 72. *Idem* (2004) *La caduta della Repubblica romana*, Ed. Laterza, Roma-Bari.
- BURDESE A. *Manual de Derecho Público Romano*, ed. española de A. Latorre y A. Martínez Sarrión, Bosch, Barcelona, 1972.
- CAPOGROSSI COLOGNESI L. *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna, 2009.
- CASAVOLA F. *Constitucionalismo romano y constitucionalismo moderno*, Seminarios Complutenses de Derecho Romano, 15, Madrid, 2004.
- CASSOLA F. *I gruppi politici romani nel III secolo A.C.*, Trieste, 1962.
- CASTÁN S. (2007) *Trabajo, economía y esclavitud en Roma*, en FIDES. HVMANITAS. IVS. Studi in onore di L. Labruna, t. 2, Napoli, *Idem* (2011) *El matrimonio como estrategia en la carrera política durante el último tramo de la República*, RIDROM. Revista Internacional de Derecho Romano (on line), 7, octubre. *Idem* (2012) *Una aproximación a la democracia romana a través del sufragio activo y pasivo*, en Los orígenes de la Democracia: una visión interdisciplinar (A. Valmaña ed.), A Coruña, 2012.
- CERAMI P. *Sulla eleggibilità del presidente dei comizi elettorali*, Studi per Giovanni Nicosia, t. 2, Milano, 2007.



- CERAMI P./CORBINO A./METRO A./PURPURA G. *Ordinamento costituzionale e produzione del diritto in Roma antica. I fondamenti dell'esperienza giuridica occidentale*, Napoli, 2006.
- CERAMI P./PURPURA G. *Profilo storico-giurisprudenziale di Diritto Pubblico Romano*, Torino, 2007.
- CHAIGNE G. *L'ambitus et les mœurs électorales des Romains*, Paris, 1911.
- CHENOLL ALFARO R. *Soborno y elecciones en la República romana*, Universidad de Málaga, 1984.
- CLAASSEN J.M. *Exile. Death and Immortality: voices from the Grave*, Latomus, 55, 1996.
- COLI U. (1957a) s.v. *Ambitus*, NNDI, 1, Torino. *Idem* (1957b) s.v. *Consoli (Diritto Romano)*, NNDI, 4, Torino.
- CORNELL T.J. *Los orígenes de Roma c. 1000-264 a. C.*, Ed. Crítica, Barcelona, 1999.
- COSTA E. (1890) *Il Diritto privato romano nelle commedie di Plauto*, Torino. *Idem* (1927) *Cicerone giureconsulto*, t. 2, Bologna, *Idem* (2007) *Cicerone giureconsulto*, t. 1, Pamplona (reimpr. Bologna, 1927).
- CRIFÒ G. *Ricerche sull'exilium, l'origine dell'istituto e gli elementi della sua evoluzione*, Milano, 1960.
- DAHL R. *La democrazia*, en POSTData. Revista de Reflexión y Análisis Político (online), 10, 2004 (originariamente publicado en Encyclopaedia Britannica, ed. 2004).
- DE FRANCISCI P. *Storia del Diritto Romano*, 1, Milano, 1939.
- DE LAS HERAS G. *El régimen jurídico-político de Augusto en el marco de la crisis republicana: ¿revolución o reforma?*, Ed. Bomarzo, Albacete, 1989.
- DE MARTINO F. (1972) *Storia della costituzione romana*, 2ª ed., Napoli. *Idem* (1988) *Clienti e condizioni materiali in Roma arcaica*, en Nuovi studi di economia e Diritto Romano, Roma. *Idem* (2003a) *Le idee costituzionali dell'antichità classica e la nostra costituzione*, en Diritto, economia e società nel mondo romano, 4, Napoli. *Idem* (2003b) *Conclusioni*, en Diritto, economia e società nel mondo romano, 4, Napoli.
- DE ROBERTIS F.M. (1938) *Il Diritto associativo romano*, Laterza, Bari. *Idem* (1971) *Storia delle corporazioni e del regime associative nel mondo romano*, 1, Bari. *Idem* (1981) *Il fenomeno associative nel mondo romano. Dai college della Repubblica alle corporazioni del Basso Impero*, Roma (ristampa anastatica 1955).
- DE SANCTIS G. (1907) *Storia dei Romani*, t.2, Milano-Torino-Roma. *Idem* (1923) *Storia dei Romani*, t.4.1, Torino.
- DENIAUX E. *De l'ambitio à l'ambitus: les lieux de la propaganda et de la corruption électorale à la fin de la république*, en Urbs. Espace urbain et histoire (Ier siècle av. J.-C.-IIIe siècle ap. J.-C.), Rome, 1987.
- DOSI A. *Così votavano i romani. Il sistema elettorale*, Roma, 2004.
- DUPLÁ A. *La República romana arcaica (509-264 a. C.)*, Ed. Síntesis, Madrid, 2003.
- ERNOUT A./MEILLET A. *Dictionnaire etymologique de la langue latine. Histoire des mots*, 3ª ed., Paris, 1951.
- FASCIONE L. (1981) *Alle origini della legislazione de ambitu*, en Legge e società nella repubblica romana (a cura di F. SERRAO), Napoli. *Idem* (1984) *Crimen e quaestio ambitus nell'età repubblicana. Contributo allo studio del Diritto criminale repubblicano*, Milano. *Idem* (1988) *Le norme 'de ambitu' della 'lex Ursonensis'*, Labeo, 34, 2.
- FERENCZY E. *From the Patrician State to the Patricio-plebeian State*, Amsterdam, 1976.
- FERNÁNDEZ DE BUJÁN A. *Historia del Derecho Romano*, Ed. Aranzadi, 2010.

- FERRARY J.L. *La legislation de ambitu, de Sulla a Auguste*, en IVRIS VINCVLA. Studi in onore di M. Talamanca, 8, Napoli, 2001.
- FERRINI C. *Diritto penale romano*, Milano, 1902.
- FINLEY M. *La política nel mondo antico*, Roma-Bari, 1985.
- FÖGEN M.T. *Storie di diritto romano. Origine ed evoluzione di un sistema sociale*, traduzione ed edizione italiana a cura di A. Mazzacane, Bologna, 2005.
- FUENTESECA P. *Historia del Derecho Romano*, (Madrid, 1987) ahora en Estudios de Derecho Romano, Fundación Registral, Madrid, 2009.
- FUSTEL DE COULANGES N.D. *La ciudad antigua*, trad. de J. Petit y A. Vilá, Madrid, 1947.
- GABBA E. *Ricchezza e classe dirigente romana fra III e I sec. A.C.*, Rivista Storica Italiana, 93, 3, 1981.
- GALLO M. *Il broglio elettorale nella Roma di Cicerone. Svolgimento delle elezioni politiche, brogli elettorali, propaganda, corruzione, raccomandazioni a Roma nell'ultimo secolo dell'età repubblicana*, Firenze, 2000.
- GARLAN Y. *War in the Ancient World. A Social History*, translated from the French by J. Lloyd, London, 1975.
- GELZER M. *The Roman Nobility*, translated with an introduction by R. Seager, Oxford, 1975.
- GENTILE I. *Le elezioni e il broglio nella Repubblica Romana*, Milano, 1879 (ed. anastatica Roma, 1971).
- GIUFFRÈ V. *La repressione criminale nell'esperienza romana*, Napoli, 1998.
- GOLDSWORTHY A. *La caída de Cartago. Las Guerras Púnicas, 265-146 a.C.*, Ariel, Barcelona, 2008.
- GREENIDGE A.H.J. *The Legal Procedure of Cicero's Time*, Oxford, 1901.
- GRIFFIN M. *The Tribune C. Cornelius*, JRS, 63, 1973.
- GRIMAL, P. (1975) *Lex Licinia de sodaliciis*, en *Ciceroniana. Hommages à K. Kumaniecki*, Leiden. Idem (2007) *La civilización romana. Vida, costumbres, leyes, artes*, Barcelona.
- GRUEN E.S. (1968) *Roman Politics and Criminal Court, 149-78 B.C.*, Cambridge. Idem (1974) *The Last Generation of the Roman Republic*, Berkeley, University of California Press.
- GUARINO A. (1975) *La rivoluzione della plebe*, Napoli. Idem (1979) *La democrazia a Roma*, Napoli. Idem (2006) *La costituzione democratica romana e le sue vicende*, SDHI, 72.
- GUILLÉN J. *Vrbs Roma II. La vida pública*, 5ª ed., Salamanca, 2002.
- HEITLAND W.E. *The Roman Republic*, 3, en *The Roman Republic*, Cambridge University Press, 1909.
- HENDERSON M.I. *De commentarioli petitionis*, JRS, 40, 1950.
- HERNÁNDEZ-TEJERO L. *Notas sobre la Lex Licinia de Sodaliciis*, Seminarios Complutenses de Derecho Romano, 20-21, Madrid, 2007-2008.
- HÖLKESKAMP K. (1993) *Conquest, Competition and Consensus: Roman expansion in Italy and the rise of the nobilitas*, Historia, 42. Idem (1995) *Oratores maxima scaena: Redem vor dem Volk in der politischen Kultur der Republik*, en *Demokratie in Rom? Die Rolle des Volkes in der Politik der römischen Republik*, (M. Jehne Hg.), Stuttgart. Idem (2010) *Reconstructing the Roman Republic. An ancient political cultura and modern research*, Princeton University Press (edición original München 2004).
- HOMO L. *Roman Political Institutions: from City to State*, Routledge, 1962.
- HUMBERT M. *Institutions politiques et sociales de l'antiquité*, 4ª ed., Paris, 1991.
- HUSBAND R.W. (1915) *The Law of Poetelius on Corrupt Practices at Elections*, The Classical Journal, 10, nº 8 (may 1915). Idem (1916a) *Election Laws in Republican Rome*, The Classical Journal,

- 11, nº 9 (jun. 1916). *Idem* (1916b) *Legislation against Political Clubs during the Republic*, The Classical Weekly, 10, nº 2 (oct. 9, 1916). *Idem* (1916c) *Legislation against Political Clubs during the Republic (Continued)*, The Classical Weekly, 10, nº 3 (oct. 16, 1916).
- KNAPP R. *Los olvidados de Roma. Prostitutas, forajidos, esclavos, gladiadores y gente corriente*, Ariel, Barcelona, 2011.
- KOVALIOV S.I. *Historia de Roma*, 3ª ed., ed. española a cargo de D. Plácido, Akal, Madrid, 1979.
- KOWALSKI H. *Die Wahlbestechungen in Kaiserzeitlichen Rom*, *Pomöerium*, 6, 2007-8.
- KUNKEL W. *Historia del Derecho Romano*, 9ª ed., trad. de la 4ª ed. alemana por J. Miquel, Ariel, Barcelona, 1989.
- LABOULAYE E. *Essai sur les lois criminelles des romains concernant la responsabilité des magistrats*, París, 1845.
- LEVICK B. *Morals, Politics and the Fall of the Roman Republic*, en *Greece & Rome*, 29, 1 (apr. 1982).
- LICANDRO O. *In magistratu damnari. Ricerche sulla responsabilità dei magistrati romani durante l'esercizio delle funzioni*, Torino, 1999.
- LINDERSKI J. *Buying the vote: Electoral Corruption in the Late Republic*, *The Ancient World*, 11, 1985.
- LINTOTT A.W. (1968) *Violence in Republican Rome*, Oxford. *Idem* (1984) *The Political Character of the Classical Roman Republic, 200-151 B.C.*, *JRS*, 74. *Idem* (1990) *Electoral bribery in the Roman Republic*, *JRS*, 80. *Idem* (1992) *Aristotle and Democracy*, en *The Classical Quarterly*, 42, nº 1. *Idem* (1999) *The constitution of the Roman Republic*, Oxford.
- MACKAY C.S. *El declive de la República romana. De la oligarquía al Imperio*, Ariel, Barcelona, 2011.
- MAGDELAINE A. (1964) *Auspicia ad patres redeunt*, *Hommages à J. Bravet*, *Latomus*. *Idem* (1971) *Remarques sur la société archaïque*, *REL*, 49.
- MANCUSO G. *Patres minorum gentium*, *Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo*, 34, 1973.
- MASIELLO T. *Corso di Storia del Diritto Romano*, 3ª ed., Bari, 2011.
- MATTINGLY H.B. *The First Period of Plautine Revival*, *Latomus*, 19, 2, 1960.
- MCDONALD W. *The Tribunate of Cornelius*, en *The Classical Quarterly*, 23, 3-4 (Jul.-Oct. 1929).
- MCDONNELL M. *Ambitus and Plautus's Amphitruo 65-81*, *The American Journal of Philology*, 107, 1986.
- MILLAR F. (1984) *The Political Character of the Classical Roman Republic, 200-151 B.C.*, *JRS*, 74. *Idem* (1986) *Politics, Persuasion and the People before the Social War (150-90 B.C.)*, *JRS*, 76. *Idem* (1998) *The crowd in Rome in the Late Republic*, University of Michigan. *Idem* (2002) *Popular Politics at Rome in the Late Republic*, en Millar F. *Rome, the Greek World, and the East*, 1, *The Roman Republic and the Augustan Principate* (eds. H. Cotton-G. Rogers, University of North Caroline).
- MOMIGLIANO A. *Rw. The Roman Revolution by Ronald Syme*, *JRS*, 30, 1940.
- MOMMSEN T. (1955) *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, (reimpr. Graz, 1955). *Idem* (1985) *Le Droit Public Romain*, París, 1985 (reimp.).
- MONTERO S./MARTÍNEZ-PINNA J. *El dualismo Patricio-plebeyo*, en *Historia del Mundo Antiguo*, 38, Akal, Madrid, 1990.
- MONTESQUIEU (1835) *Consideraciones sobre las causas de la grandeza y decadencia de los romanos*, Tarragona. *Idem* (1984) *Del espíritu de las leyes*, 2 vols., Ed. Orbis, Barcelona.

- MORSTEIN-MARX R. *Mass oratory and political power in the late roman republic*, Cambridge, 2004.
- MOURITSEN H. *Plebs and politics in the late roman republic*, Cambridge, 2001.
- MULGAN R. *Aristotle's Analysis of Oligarchy and Democracy*, en *A companion to Aristotle's Politics* (D. Keyt and F.D. Mille Eds.), Oxford and Cambridge, 1991.
- MURGA J.L. *El delito de ambitus y su posible reflejo en las leyes municipales de la Bética*, Seminarios Complutenses de Derecho Romano, 3, Madrid, 1992.
- NADIG P. *Ardet ambitus. Untersuchungen zum Phänomen der Wahlbestechungen in der römischen Republik*, Frankfurt am Main, 1997.
- NARDO D. *Il commentariolum petitionis. La propaganda elettorale nella <ars> di Quinto Cicerone*, Padova, 1970.
- NICOLET C. (1959) *Confusio Suffragiorum. A propos d'une réforme électorale de Caius Graccus*, Mélanges d'archéologie et d'histoire, 71. *Idem* (1964) *Les idées politiques à Rome sous la République*, Paris. *Idem* (1966) *L'ordre équestre à l'époque républicaine*, t.1, Paris. *Idem* (1970) *Ciceron, Platon et le vote secret*, Historia, 19, pp. 39 ss. *Idem* (1977) *Les classes dirigeantes romaines sous la République: ordre sénatorial et ordre équestre*, Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 32e année, 4. *Idem* (1988) *The world of the Citizen in Republican Rome*, University of California Press. *Idem* (1991) *El ciudadano y el político*, en *El Hombre Romano* (A. Giadina ed.), Alianza Editorial, Madrid.
- NORTH J.A. *Democratic politics in Republican Rome*, Past & Present, 126 (feb. 1990).
- OGILVIE R.M. *Roman Literature and Society*, Penguin Books, 1980.
- OLBRYN K./SAMARAS T. *Is ancient democracy quasi-liberal?*, RIDA, 54, 2007.
- PAIS E. *Storia critica di Roma durante i primi cinque secoli*, 2, Roma, 1915.
- PINA POLO F. (1989) *Las contiendas civiles y militares en Roma*, Universidad de Zaragoza. *Idem* (1994) *Ideología y práctica política en la Roma tardorrepública*, Gerión, 12. *Idem* (1997) *Contra arma verbis. El orador ante el pueblo en la Roma tardorrepública*, Zaragoza. *Idem* (1999) *La crisis de la República (133-44 a. C.)*, Ed. Síntesis, Madrid. *Idem* (2005) *I rostra come espressione di potere della aristocrazia romana*, en *Popolo e potere nel mondo antico* (G. Urso ed.), Pisa.
- PUCCI G. *I consumi alimentari*, en *Storia di Roma*, t. 4, Caratteri e morfologie (A. Momigliano-A. Schiavone eds.), Torino, 1989.
- RESINA P. *La corrupción electoral en la comedia plautiana*, RGDR (Iustel), 16, 2011.
- RIBAS ALBA J.M. *Democracia en Roma. Introducción al derecho electoral romano*, 2ª ed., Granada, 2009.
- RICHARD J.C. *Les origines de la plèbe romaine. Essay sur la formation du dualisme patricio-plébéien*, Roma, 1978.
- ROLDÁN HERVÁS J.M. (1980) *Contraste político, finanzas públicas y medias sociales*, Memorias de historia antigua, 4, 1980, Universidad de Oviedo, 89 ss. *Idem* (1984) *El orden constitucional romano en la primera mitad del siglo II: de la res publica aristocrática a la res publica oligárquica*, Gerión, 2. *Idem* (2008) *El ejército de la República romana*, 2ª ed., Madrid, 2008.
- ROMÁN BRAVO J. (Ed.) *Plauto, Comedias*, Ed. Cátedra, Madrid, 1998.
- ROTONDI G. *Leges publicae populi romani*, Hildesheim, 1990 (reprint Milano, 1912).
- SALERNO F. *Tacita Libertas. L'introduzione del voto segreto nella Roma repubblicana*, Napoli, 1999.

- SANTALUCIA B. (1994) *Pena criminal*, en Studi di Diritto penale romano, Roma. *Idem* (1998) *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2ª ed., Milano, 1998.
- SCHERILLO G./DELL'ORO A. *Manuale di storia del Diritto Romano*, Milano, 1977.
- SCHIAVONE A. (a cura di) *Storia del Diritto Romano e linee di Diritto Privato*, Torino, 2005.
- SCHULLER W. *Korruption im Altertum*, München-Wien, 1982.
- SCULLARD H.H. (1973) *Roman Politics, 220-150 B.C.*, Oxford. *Idem* (2011) *From the Gracchi to Nero. A history of Rome from 133 B.C. to A.D. 68*, Routledge, 2011 (reimpr. 1959).
- SHACKLETON BAILEY D.R. *The Prosecution of Roman Magistrates-Elect*, en Phoenix, 24, 1970.
- SHERWIN-WHITE A.N. *Violence in Roman Politics*, JRS, 46, 1956.
- SOLIDORO MARUOTTI L. *La repressione della criminalità organizzata nel Diritto Romano. Criteri di impostazione della ricerca*, en IVRIS VINCVULA. Studi in onore di M. Talamanca, 3, Napoli, 2001.
- STAVELEY E.S. (1953) *The Significance of the Consular Tribune*, JRS, 43, 1953.
- STOLLE R. *Ambitus et Invidia*, Frankfurt am Main, 1999.
- SYME R. *The Roman Revolution*, Oxford, 1939.
- TAYLOR L.R. (1942) *Caesar and the Roman Nobility*, en Transactions and Proceeding of the American Philological Association, 73. *Idem* (1962) *Forerunners of the Gracchi*, JRS, 52. *Idem* (1966) *Roman Voting Assemblies. From the Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar*, Ann Arbor, University of Michigan. *Idem* (1984) *Party politics in the age of Caesar*, Berkeley-Los Angeles-London, 1984 (1ª ed., University of California, 1949).
- TORRENT A. (1995) *Derecho Público romano y sistema de fuentes*, Zaragoza. *Idem* (2005a) *Derecho penal romano. I. Épocas monárquica y republicana*, en El Derecho Penal: de Roma al Derecho actual, Edisofer, Madrid. *Idem* (2005b) *Diccionario de Derecho Romano*, Edisofer, Madrid. *Idem* (2012) *Partidos políticos en la República tardía. De los Gracos a César (133-44 A. C.)*, RIDROM. Revista Internacional de Derecho Romano (on line), 8, 2012.
- VENTURINI C. (1984) *L'orazione Pro Cn. Plancio e la lex Licinia de sodaliciis*, Studi in onore di C. Sanfilippo, 5, Milano. *Idem* (1996) *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa, 1996.
- VEYNE P. *Le Pain et le Cirque. Sociologie Historique d'un pluralisme politique*, Paris, 1976.
- WALLINGA T. *Ambitus in the Roman Republic*, RIDA, 41, 1994.
- WINTERS J.A. *Oligarchy*, Cambridge University Press, 2011.
- WIRSZUBSKI CH. *Libertas as a Political Idea at Rome during the Late Republic and Early Principate*, Cambridge University Press, 1950.
- WISEMAN T.P. (1969) *The Census in the First Century B.C.*, JRS, 59. *Idem* (1971) *New Men in the Roman Senate 139 B.C.-A.D. 14*, Oxford University Press.
- WOOD N. *Cicero's Social & Political Thought*, University of California Press, 1988.
- YAKOBSON A. (1992) *Petitio et largitio: Popular Participation in the Centuriate Assembly of the Late Republic*, JRS, 82. *Idem* (1999) *Elections and electioneering in Rome. A study in the political system of the late Republic*, Franz Steiner Verlag Stuttgart.